

**UNIVERSIDAD DE HUANUCO**  
**FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLITICAS**  
**PROGRAMA ACADÉMICO DE DERECHO Y CIENCIAS POLITICAS**



**TESIS**

---

**“LA INCIDENCIA DE LAS MEDIDAS DE PROTECCIÓN NO  
DICTADAS POR VIOLENCIA FAMILIAR EN LA MODALIDAD DE  
MALTRATO PSICOLÓGICO POR EL SEGUNDO JUZGADO DE  
FAMILIA DE HUÁNUCO, EN LA QUINTA FISCALÍA PROVINCIAL  
PENAL CORPORATIVA DE HUÁNUCO DE ENERO A SETIEMBRE  
DE 2018”**

---

**PARA OPTAR EL TÍTULO PROFESIONAL DE ABOGADA**

**AUTORA: Valdez Rodríguez, Helen Johanny**

**ASESOR: Delgado Y Manzano, Jesus**

**HUÁNUCO – PERÚ**

**2020**

U

D

H



**UDH**  
UNIVERSIDAD DE HUANUCO  
<http://www.udh.edu.pe>

**TIPO DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN:**

- Tesis ( X )
- Trabajo de Suficiencia Profesional( )
- Trabajo de Investigación ( )
- Trabajo Académico ( )

**LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN:** Desarrollo de estudios en derechos sustantivos y procesales en constitucional, civil, penal, laboral, tributario, administrativo y empresarial

**AÑO DE LA LÍNEA DE INVESTIGACIÓN** (2018-2019)

**CAMPO DE CONOCIMIENTO OCDE:**

**Área:** Ciencias Sociales

**Sub área:** Derecho

**Disciplina:** Derecho

**DATOS DEL PROGRAMA:**

Nombre del Grado/Título a recibir: Título

Profesional de Abogada

Código del Programa: P01

Tipo de Financiamiento:

- Propio ( X )
- UDH ( )
- Fondos Concursables ( )

**DATOS DEL AUTOR:**

Documento Nacional de Identidad (DNI): 45433614

**DATOS DEL ASESOR:**

Documento Nacional de Identidad (DNI): 22409401

Grado/Título: Abogado

Código ORCID: 0000-0002-6776-6292

**DATOS DE LOS JURADOS:**

N°	APELLIDOS Y NOMBRES	GRADO	DNI	Código ORCID
1	Peralta Baca, Hugo Baldomero	Abogado	22461001	0000-0001-5570-7124
2	Montaldo Yerena, Ruth Mariksa	Magister en gestión pública	22408350	0000-0002-5081-6310
3	Vidal Romero, Hugo Ovidio	Abogado	22474986	0000-0001-6103-6777

## ACTA DE SUSTENTACIÓN DE TESIS

En la ciudad de Huánuco, siendo las 11:03 horas del día 07 del mes de Diciembre del año 2020, en cumplimiento de lo señalado en el Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad de Huánuco, se reunieron el Sustentante y el Jurado calificador mediante plataforma virtual Google meet integrado por los docentes:


<b>Mtro. (a) Mariella Catherine Garay Mercado</b>	<b>: Presidente</b>
<b>Mtro. (a) Ruth Mariksa Montaldo Yerena</b>	<b>: Secretaria</b>
<b>Abog. Hugo Ovidio Vidal Romero</b>	<b>: Vocal</b>
<b>Abog. Hugo Baldomero Peralta Baca</b>	<b>: Suplente</b>

Nombrados mediante la Resolución N° 843-2020-DFD-UDH de fecha 02 de diciembre de 2020, para evaluar la Tesis intitulada intitulo "LA INCIDENCIA DE LAS MEDIDAS DE PROTECCIÓN NO DICTADAS POR VIOLENCIA FAMILIAR EN LA MODALIDAD DE MALTRATO PSICOLÓGICO POR EL SEGUNDO JUZGADO DE FAMILIA DE HUÁNUCO, EN LA QUINTA FISCALÍA PROVINCIAL PENAL CORPORATIVA DE HUÁNUCO DE ENERO A SETIEMBRE DE 2018", presentado por la Bachiller en Derecho y Ciencias Políticas, **VALDEZ RODRIGUEZ, Helen Johanny**, para optar el Título profesional de Abogado.


Dicho acto de sustentación se desarrolló en dos etapas: Exposición y Absolución de preguntas; procediéndose luego a la evaluación por parte de los miembros del jurado

Habiendo absuelto las objeciones que le fueron formuladas por los miembros del jurado y de conformidad con las respectivas disposiciones reglamentarias, procedieron a deliberar y calificar, declarándolo (a) **APROBADA** por **UNANIMIDAD** con el calificativo cuantitativo de **DIECISIETE** y cualitativo de **MUY BUENO**.

Siendo las 11:56 horas del día 07 del mes de Diciembre del año 2020 los miembros del jurado calificador Ratificados firman la presente Acta en señal de conformidad.



Abog. Hugo Baldomero Peralta Baca  
Presidente



Abog. Hugo Ovidio Vidal Romero  
Vocal



Mtro. (a) Ruth Mariksa Montaldo Yerena  
Secretaria

# UNIVERSIDAD DE HUÁNUCO

FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS

**RESOLUCIÓN N° 843-2020-DFD-UDH**

Huánuco, 02 de diciembre de 2020

Visto, el ID 276304-0000003370 de fecha 20 de noviembre de 2020 presentado por la Bachiller **VALDEZ RODRIGUEZ, Helen Johanny**, quien pide se Ratifique y se designe a los miembros del Jurado y se señale fecha y hora para sustentar el Trabajo de Investigación Científica (Tesis) intitulado intitulado **“LA INCIDENCIA DE LAS MEDIDAS DE PROTECCIÓN NO DICTADAS POR VIOLENCIA FAMILIAR EN LA MODALIDAD DE MALTRATO PSICOLÓGICO POR EL SEGUNDO JUZGADO DE FAMILIA DE HUÁNUCO, EN LA QUINTA FISCALÍA PROVINCIAL PENAL CORPORATIVA DE HUÁNUCO DE ENERO A SETIEMBRE DE 2018”** para optar el Título profesional de Abogado y;

## **CONSIDERANDO:**

Que, mediante Resolución N° 113-2020-DFD-UDH de fecha 03 de marzo de 2020 se Aprueba el informe final de Trabajo de Investigación Científica (Tesis) intitulado intitulado intitulado **“LA INCIDENCIA DE LAS MEDIDAS DE PROTECCIÓN NO DICTADAS POR VIOLENCIA FAMILIAR EN LA MODALIDAD DE MALTRATO PSICOLÓGICO POR EL SEGUNDO JUZGADO DE FAMILIA DE HUÁNUCO, EN LA QUINTA FISCALÍA PROVINCIAL PENAL CORPORATIVA DE HUÁNUCO DE ENERO A SETIEMBRE DE 2018”**; del Programa Académico de Derecho y Ciencias Políticas de la UDH, quien anteriormente fue declarado **APTO** para sustentar dicha investigación;

Que, estando a lo dispuesto en el Art. 41 del Reglamento General de Grados y Títulos a lo Establecido en el Art. 44 de la Nueva Ley Universitaria N° 32220; Inc. n) del Art 44° del Estatuto de la Universidad de Huánuco; y la facultad contemplada en la Resolución N° 795-2018-R-CU-UDH de fecha 13 de julio de 2018;

## **SE RESUELVE:**

**Artículo Primero. – RATIFICAR Y DESIGNAR** a los miembros del Jurado de Tesis para examinar a la Bachiller en Derecho y Ciencias Políticas de la UDH, **VALDEZ RODRIGUEZ, Helen Johanny** para optar el Título Profesional de Abogado por la modalidad de Sustentación del Trabajo de Investigación Científica (Tesis), a los siguientes docentes:

<b>Mtro. (a) Mariella Catherine Garay Mercado</b>	<b>: Presidente</b>
<b>Mtro. (a) Ruth Mariksa Montaldo Yerena</b>	<b>: Secretaria</b>
<b>Abog. Hugo Ovidio Vidal Romero</b>	<b>: Vocal</b>
<b>Abog. Hugo Baldomero Peralta Baca</b>	<b>: Suplente</b>

**Artículo Segundo. – SEÑALAR** el día *lunes 07 de diciembre del año 2020 a horas 11:00 a.m.* dicha sustentación pública de manera virtual.

Regístrese, comuníquese y archívese



**DISTRIBUCIÓN:** Of. Mat. Y Reg. Acad., Exp. Graduando, Interesada, Jurados (4) Asesor. Archivo, FCB/yt

## **DEDICATORIA**

A Dios. A mis padres Bertha y Pio por su apoyo constante, a mi hijo Stefano por ser mi fortaleza para cumplir mis metas.

## **AGRADECIMIENTO**

A la Universidad de Huánuco, mi alma mater, a mis docentes por impartir sus conocimientos jurídicos en mi formación profesional.

## ÍNDICE

DEDICATORIA .....	II
AGRADECIMIENTO .....	III
ÍNDICE .....	IV
ÍNDICE DE CUADROS .....	VI
ÍNDICE DE TABLAS .....	VII
ÍNDICE DE GRÁFICOS .....	VIII
RESUMEN .....	IX
SUMMARY .....	X
INTRODUCCIÓN .....	XI
CAPÍTULO I .....	12
PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN .....	12
1.1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA .....	12
1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA .....	13
1.2.1. Problema General .....	13
1.2.2. Problemas Específicos .....	13
1.3. OBJETIVO GENERAL .....	14
1.4. OBJETIVOS ESPECÍFICOS .....	14
1.5. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN .....	14
1.6. LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN .....	15
1.7. VIABILIDAD DE LA INVESTIGACIÓN .....	15
CAPÍTULO II .....	16
2. MARCO TEÓRICO .....	16
2.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN .....	16
2.1.1. Antecedentes internacionales .....	16
2.1.2. Antecedentes nacionales .....	17
2.1.3. Antecedentes locales .....	20
2.2. BASES TEÓRICAS .....	20
2.3. DEFINICIONES CONCEPTUALES .....	49
2.4. HIPÓTESIS .....	51
2.5. VARIABLES .....	51
2.5.1. Variable Independiente .....	51
2.5.2. Variable Dependiente .....	51

2.6. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES .....	52
CAPÍTULO III .....	53
3. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN .....	53
3.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN .....	53
3.1.1. Enfoque .....	53
3.1.2. Alcance o nivel .....	53
3.1.3. Diseño .....	53
3.2. POBLACIÓN Y MUESTRA.....	53
3.3. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS..	54
3.3.1. Para la recolección de datos .....	54
3.3.2. Para el procesamiento y análisis de información .....	54
CAPÍTULO IV.....	55
4. RESULTADOS .....	55
4.1. PROCESAMIENTO DE DATOS.....	55
4.2. CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS Y PRUEBA DE HIPÓTESIS ...	62
CAPÍTULO V.....	63
5. DISCUSIÓN DE RESULTADOS .....	63
5.1. CONTRASTACIÓN DE LOS RESULTADOS DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN.....	63
CONCLUSIONES .....	64
RECOMENDACIONES .....	65
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS.....	66
ANEXOS .....	68
MATRIZ DE CONSISTENCIA .....	69



## ÍNDICE DE CUADROS

CUADRO NO. 01 – VARIABLE INDEPENDIENTE.....	56
CUADRO NO. 02 – VARIABLE DEPENDIENTE .....	57

## ÍNDICE DE TABLAS

TABLA N° 01 – MATRIZ DE ANÁLISIS DE CARPETAS FISCALES – DISPOSICIÓN DE NO PROCEDE FORMALIZAR NI CONTINUAR INVESTIGACIÓN PREPARATORIA.....	58
TABLA N° 02 – MATRIZ DE ANÁLISIS DE CARPETAS FISCALES – EXAMEN PERICIAL PSICOLÓGICO .....	60

## ÍNDICE DE GRÁFICOS

GRÁFICO N° 01 – MATRIZ DE ANÁLISIS DE CARPETAS FISCALES – DISPOSICIÓN DE NO PROCEDE FORMALIZAR NI CONTINUAR INVESTIGACIÓN PREPARATORIA.....	58
GRÁFICO N° 02 – MATRIZ DE ANÁLISIS DE CARPETAS FISCALES – EXAMEN PERICIAL PSICOLÓGICO .....	61

## **RESUMEN**

El Informe del trabajo de investigación trata sobre la incidencia de las Medidas de Protección no dictadas por Violencia Familiar en la modalidad de Maltrato Psicológico por el Segundo Juzgado De Familia De Huánuco, en la Quinta Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Huánuco de enero a setiembre de 2018, su contenido está dividida en cinco capítulos: El primer capítulo se relaciona con la descripción del problema, en la que el Segundo Juzgado de Familia de Huánuco, pese a resolver no otorgar las Medidas de Protección por maltrato psicológico, por la falta de afectación psicológica, dispone en el día remitir copias certificadas a la Fiscalía Penal Corporativa de Huánuco. El segundo capítulo se trata sobre los antecedentes de la investigación a nivel internacional, nacional y local, relacionado con la investigación y sus bases teóricas se desarrolló en atención a su variable independiente incidencia de las medidas de protección no dictadas, y su variable dependiente por violencia familiar en la modalidad de maltrato psicológico. El tercer capítulo versa sobre la metodología de la investigación empleada de tipo sustantiva, y como base la descripción en el tiempo sobre los expedientes sobre Violencia familiar en la modalidad de maltrato psicológico, obrantes en el Segundo Juzgado de Familia de Huánuco, y las carpetas fiscales sobre Lesiones Psicológicas tramitados en la Quinta Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Huánuco, su muestra está constituida por seis expedientes sobre violencia familiar psicológica del Segundo Juzgado de Familia de Huánuco, y 06 carpetas fiscales de la Quinta Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Huánuco. El capítulo cuarto contiene básicamente los resultados de la investigación, constituida por el procesamiento de datos, contrastación y prueba de hipótesis, y para terminar en el capítulo quinto la Discusión de Resultados, las conclusiones y recomendaciones.

## **SUMMARY**

The Report of the research work deals with the incidence of the Protection Measures not dictated by Family Violence in the form of Psychological Abuse by the Second Family Court of Huánuco, in the Fifth Provincial Criminal Prosecutor's Office of Huánuco from January to September of 2018, its content is divided into five chapters: The first chapter is related to the description of the problem, in which the Second Family Court of Huánuco, despite deciding not to grant the Protection Measures for psychological abuse, due to the lack of involvement psychological, on the day send certified copies to the Corporate Criminal Prosecutor of Huánuco. The second chapter deals with the background of research at international, national and local level, related to research and its theoretical bases was developed in response to its independent variable incidence of protection measures not dictated, and its variable dependent on violence family in the form of psychological abuse. The third chapter deals with the methodology of substantive research used, and based on the description over time on the files on family violence in the form of psychological abuse, workers in the Second Family Court of Huánuco, and the fiscal folders Regarding Psychological Injuries processed in the Fifth Corporate Criminal Provincial Prosecutor's Office of Huánuco, its sample consists of six files on psychological family violence of the Second Family Court of Huánuco, and 06 fiscal files of the Fifth Corporate Criminal Provincial Prosecutor's Office of Huánuco. The fourth chapter basically contains the results of the investigation, constituted by data processing, contrast and hypothesis testing, and to end in the fifth chapter the Discussion of Results, conclusions and recommendations.

## INTRODUCCIÓN

El trabajo de investigación realizada contenida en el informe final, trata sobre la incidencia de las Medidas de Protección no dictadas por Violencia Familiar en la modalidad de Maltrato Psicológico por el Segundo Juzgado De Familia De Huánuco, en la Quinta Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Huánuco de enero a setiembre de 2018, se encuentra delimitada bajo los siguientes aspectos, a saber: La descripción del problema implica en establecer que no obstante no existe afectación psicológica que acredite la lesión psicológica, el Juzgado de Familia dispone en el día remitir copias certificadas de todo lo actuado a la Fiscalía Penal Corporativa de turno de Huánuco. En cuanto a la formulación de problema, se ha tenido por conveniente plantear lo siguiente: ¿Cómo incidirá las medidas de protección no dictadas por violencia familiar en la modalidad de maltrato psicológico por el Segundo Juzgado de Familia de Huánuco, en la Quinta Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Huánuco de enero a setiembre de 2018? Asimismo se justifica la investigación porque nos ha permitido describir y explicar jurídicamente el problema existente en el proceso de violencia familiar Los objetivos se orientan a explicar la forma de demostrar el grado de incidencia de las medidas de protección no dictadas por violencia familiar en la modalidad de maltrato psicológico por el Segundo Juzgado de Familia de Huánuco, en la Quinta Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Huánuco de enero a setiembre de 2018, empleándose para tal efecto el método y técnica aplicada, y como base la descripción en el tiempo sobre los expedientes que se tramitaron, las fuentes de información se recabó de las bibliotecas de la ciudad con limitaciones.

# **CAPÍTULO I**

## **PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN**

### **1.1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA**

La presente investigación trata sobre La incidencia de las medidas de protección no dictadas por violencia familiar en la modalidad de maltrato psicológico por el Segundo Juzgado de Familia de Huánuco, en la Quinta Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Huánuco de enero a setiembre de 2018.

Toda persona tiene derecho a la tutela jurisdiccional efectiva para el ejercicio o defensa de sus derechos e intereses, con sujeción a un debido proceso, entendiéndose como “debido proceso aquel que tiene por función asegurar los derechos fundamentales consagrados en la Constitución, dando a toda persona la posibilidad de recurrir a la justicia para obtener la tutela jurisdiccional de los derechos individuales, a través de un procedimiento legal.

La Ley N° 30364, que aprueba la Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar, que tiene por objeto prevenir, erradicar y sancionar toda forma de violencia producida en el ámbito público o privado contra las mujeres por su condición de tales, y contra los integrantes del grupo familiar; en especial, cuando se encuentran en situación de vulnerabilidad, por la edad o situación física como las niñas, niños, adolescentes, personas adultas mayores y personas con discapacidad;

La citada norma establece los mecanismos, medidas y políticas integrales de prevención, atención y protección de las víctimas, así como reparación del daño causado; y dispone la persecución, sanción y reeducación de los agresores sentenciados con el fin de garantizar a las mujeres y al grupo familiar una vida libre de violencia asegurando el ejercicio pleno de sus derechos. Siendo así en su artículo 48 prevé sobre la Remisión de los actuados a la Fiscalía Provincial Penal o al Juzgado de Paz Letrado al señalar: *“48.1. Emitida la resolución que se pronuncia sobre las medidas de protección o cautelares, el Juzgado de Familia remite el expediente, según corresponda, a la Fiscalía Penal o al Juzgado de Paz Letrado para que*

*procedan conforme a sus atribuciones. En caso de duda sobre la configuración si es delito o falta, remite lo actuado a la Fiscalía Penal”.*

El problema radica en que pese a que el Segundo Juzgado de Familia de Huánuco, resuelve no otorgar las Medidas de Protección por violencia familiar en la modalidad de maltrato psicológico, a favor del agraviado, ya que del Informe Psicológico expedido por el Psicólogo del Equipo Multidisciplinario de la Corte de Huánuco, concluye que presenta: *“Evaluado no evidencia indicadores de afectación emocional, compatible a hechos denunciados”*; es decir que no existe afectación psicológica que acredite la lesión psicológica, dispone en el día remitir copias certificadas de todo lo actuado a la Fiscalía Penal Corporativa de turno de Huánuco, quien al parecer dispone no haber mérito para formalizar y continuar con la investigación preparatoria por la comisión de los delitos de agresiones en contra de las mujeres e integrantes del grupo familiar, archivándose los actuados en el modo y forma de ley.

En tal sentido, con la presente investigación pretendemos que se brinde mecanismos de solución a ello, evitando se remitan innecesariamente en el día copias certificadas de todo lo actuado a la Fiscalía Penal Corporativa de turno, recargando la labor del Ministerio Público, ya que es complementemente previsible su archivamiento, al no existir afectación psicológica que acredite la lesión psicológica en el agraviado.

## **1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA**

### **1.2.1. Problema General**

¿Cómo incidirá las medidas de protección no dictadas por violencia familiar en la modalidad de maltrato psicológico por el Segundo Juzgado de Familia de Huánuco, en la Quinta Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Huánuco de enero a setiembre de 2018?

### **1.2.2. Problemas Específicos**

**PE1** ¿Cuál es el nivel de eficacia logrado de las medidas de protección no dictadas por violencia familiar en la modalidad de maltrato psicológico por



el Segundo Juzgado de Familia de Huánuco, en la Quinta Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Huánuco de enero a setiembre de 2018?

**PE2** ¿Qué tan frecuentes han sido la inaplicación de las medidas de protección no dictadas por violencia familiar en la modalidad de maltrato psicológico por el Segundo Juzgado de Familia de Huánuco, en la Quinta Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Huánuco de enero a setiembre de 2018?

### **1.3. OBJETIVO GENERAL**

Demostrar el grado de incidencia de las medidas de protección no dictadas por violencia familiar en la modalidad de maltrato psicológico por el Segundo Juzgado de Familia de Huánuco, en la Quinta Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Huánuco de enero a setiembre de 2018.

### **1.4. OBJETIVOS ESPECÍFICOS**

**OE1** Determinar el nivel de eficacia logrado de la las medidas de protección no dictadas por violencia familiar en la modalidad de maltrato psicológico por el Segundo Juzgado de Familia de Huánuco, en la Quinta Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Huánuco de enero a setiembre de 2018.

**OE2** Identificar el nivel de frecuencia con que se han presentado las medidas de protección no dictadas por violencia familiar en la modalidad de maltrato psicológico por el Segundo Juzgado de Familia de Huánuco, en la Quinta Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Huánuco de enero a setiembre de 2018.

### **1.5. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN**

Importancia Jurídica: Conforme a lo expuesto en la descripción del problema, se tiene que las medidas de protección no dictadas por violencia familiar en la modalidad de maltrato psicológico por el Segundo Juzgado de Familia de Huánuco, tienen o no incidencia en la Quinta Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Huánuco de enero a setiembre de 2018, ya que se resuelve el archivamiento de lo actuado, al disponer no haber mérito para formalizar y continuar con la investigación preparatoria por la comisión de los delitos de agresiones en contra de las mujeres e integrantes del grupo familiar, al no existir afectación psicológica que acredite la lesión psicológica, advertido también en el Juzgado de Familia, recargando la labor del Ministerio Público

innecesariamente, por lo que se encuentra justificada la presente investigación desde dicho punto de vista.

#### **1.6. LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN**

Las limitaciones advertidas en el presente trabajo, consistieron en lo siguiente:

- Se ha tenido acceso restringido en las bibliotecas de la Universidad de Huánuco y Universidad Nacional Hermilio Valdizán, principalmente por la carencia de material bibliográfico para las bases teóricas, por lo que se ha tenido que recurrir a bibliotecas privadas.
- Por la falta en nuestro medio de investigaciones desarrolladas en relación directa con el título de nuestra investigación, por lo novedoso que resulta ser el problema investigado.
- Limitado acceso a la información, a las carpetas fiscales donde se ha dispuesto no formalizar ni continuar con la investigación preparatoria.
- Falta de análisis del tema, por parte de doctrinarios, juristas y legisladores.

#### **1.7. VIABILIDAD DE LA INVESTIGACIÓN**

El presente proyecto de investigación ha sido viable por el acceso a la información sobre el tema, tanto documentos bibliográficos, hemerográficos, así como a los expedientes sobre Violencia familiar en la modalidad de maltrato psicológico, obrantes en el Segundo Juzgado de Familia de Huánuco, y las carpetas fiscales sobre Lesiones Psicológicas tramitados en la Quinta Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Huánuco, en las que se resolvió el archivamiento de lo actuado, al disponer no haber mérito para formalizar y continuar con la investigación preparatoria por la comisión de los delitos de agresiones en contra de las mujeres e integrantes del grupo familiar, al no existir afectación psicológica que acredite la lesión psicológica. Asimismo, cuento con asesores expertos en lo jurídico y metodológico para la realización del trabajo, quienes tienen su residencia en la ciudad de Huánuco, lugar donde se desarrollará el presente proyecto científico jurídico.

## CAPÍTULO II

### 2. MARCO TEÓRICO

#### 2.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN

##### 2.1.1. Antecedentes internacionales

A nivel internacional, existen estudios relacionados con la investigación tenemos: Tesis. “*NIÑOS Y NIÑAS EXPUESTOS/AS A VIOLENCIA INTRAFAMILIAR: SIGNIFICADOS OTORGADOS A LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR Y ORGANIZACIÓN DEL DESARROLLO PSICOLÓGICO*”. Autor: Christel BAADER BADE. UNIVERSIDAD: UNIVERSIDAD DE CHILE. AÑO: 2014. Tesis para optar al Grado de Magíster en Psicología, mención Psicología Clínica Infante Juvenil.

#### Conclusiones

*“1. Conclusiones en relación a los Significados otorgados a las experiencias de Violencia Intrafamiliar A partir de las entrevistas realizadas a los niños se pudo obtener información relativa a la manera en que estos significan diversas temáticas asociadas a la violencia intrafamiliar; tipo de violencia a la cual se han encontrado o se encuentran actualmente expuestos, tipo de exposición a dicha violencia, motivos que significan como causantes de la violencia intrafamiliar, manera en que perciben y significan la violencia intrafamiliar en tanto constructo, emociones, acciones y pensamientos asociados a los episodios de violencia, consecuencias que según su parecer sufrirían los niños expuestos a la misma, manera en que significan su propia relación con el padre y la madre, y finalmente, forma en que significan la relación actual entre sus padres.*

*2. En relación a la manera en que los niños de la muestra se verían expuestos a los eventos de violencia intrafamiliar, la mitad de éstos refiere verlos, en tanto la otra mitad señala haberlos escuchado. Es posible señalar por tanto que los niños de la muestra tienen un acercamiento bastante directo a los hechos de violencia ocurridos en su hogar, idea que es sostenida por diversos autores internacionales.*

**3.** *Con respecto a la manera en que los niños perciben a la violencia intrafamiliar, es posible señalar que todos la significan unánimemente como negativa. Esto ocurre tanto en el caso de la violencia en la pareja como del maltrato infantil, y resulta absolutamente coherente con lo encontrado por investigaciones internacionales (Maxwell & Carroll- Lind, 1998; Ornduff & Monahan, 1999; Piedrahita et al, 2007). Cabe destacar que al consultarle a los niños respecto de por qué consideraban que la violencia intrafamiliar “estaba mal”, todos planteaban dentro de sus respuestas soluciones a la violencia; en el caso de la violencia en la pareja, los niños señalan que los padres debieran hablar en vez de discutir y/o pegarse. Respecto del maltrato infantil, una niña señala que los niños no aprenden con golpes, sino que con palabras, mientras que otro señala que los padres deben preocuparse por sus hijos y no descuidarlos. Es posible señalar por tanto, que los niños no sólo significan negativamente la violencia, sino que también construyen activamente a nivel del pensamiento soluciones para poner fin a la misma”.*

#### Comentario

La investigadora a partir de las entrevistas realizadas a los niños, ellos perciben y significan la violencia intrafamiliar en emociones, acciones y pensamientos asociados a los episodios de violencia, manera en que significan su propia relación con el padre y la madre, y finalmente, forma en que significan la relación actual entre sus padres. Asimismo los niños señalan que los padres debieran hablar en vez de discutir y/o pegarse.

#### **2.1.2. Antecedentes nacionales**

Se ha encontrado, respecto de la investigación, antecedentes indirectos como es el caso de:

Título: “ANÁLISIS DE LA IDONEIDAD DE LAS MEDIDAS DE PROTECCIÓN DICTADAS A FAVOR DE LAS VÍCTIMAS DE VIOLENCIA EN EL PRIMER JUZGADO DE FAMILIA DE PUNO, PERIODO NOVIEMBRE DE 2015 A NOVIEMBRE DE 2016 EN EL MARCO DE LA LEY 30364 “LEY PARA PREVENIR, SANCIONAR Y ERRADICAR LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES Y LOS INTEGRANTES DEL GRUPO FAMILIAR”. Autor: Pamela

Yhosely CALISAYA YAPUCHURA. Año: 2017. Universidad: UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO. Para optar el Título Profesional de Abogado.

Conclusiones:

*“1. Las medidas de protección dictadas por el Primer Juzgado de Familia de Puno en el periodo de noviembre de 2015 a noviembre de 2016 no son idóneas.*

*2. El Primer Juzgado de Familia de Puno tramitó desde el 24 de noviembre de 2015, hasta noviembre de 2016, 656 procesos por violencia.*

*3. Son medidas de protección idóneas aquellas decisiones que el Juez de Familia dicta para proteger de manera preventiva a la víctima de violencia frente al eventual riesgo de sufrir un nuevo acto de violencia a causa de su agresor, esto atendiendo a las circunstancias particulares del caso en concreto, la ficha de valoración de riesgo, y demás circunstancias que demuestren la situación real de la víctima frente a su agresor, ponderando la proporcionalidad entre la eventual afectación causada y la medida de protección a adoptarse, no dependiendo su vigencia de la decisión final del Juez Penal o Juez de Paz Letrado.*

*4. Las medidas de protección dictadas por el Primer Juzgado de Familia de Puno en el periodo de noviembre de 2015 a noviembre de 2016 no son idóneas debido a que: - La Policía Nacional del Perú remite atestados policiales sin los requisitos mínimos que persuadan en forma suficiente y razonable al Juez de la necesidad de dictar medidas de protección. - Existe deficiente participación de la víctima en la investigación - La vigencia de las medidas de protección dictadas se encuentran supeditadas a la decisión final del Juzgado Penal o Juzgado de Paz Letrado”.*

Comentario

La investigadora concluye que las medidas de protección dictadas por el Primer Juzgado de Familia de Puno en el periodo de noviembre de 2015 a noviembre de 2016 no son idóneas, que se tramitaron 656 procesos sobre violencia familiar, sin embargo más adelante señala que las medidas de

protección son idóneas para proteger de manera preventiva a la víctima de violencia frente al eventual riesgo de sufrir un nuevo acto de violencia a causa de su agresor, para después señalar que no son idóneas debido a que La Policía Nacional del Perú remite atestados policiales sin los requisitos mínimos que persuadan en forma suficiente y razonable al Juez de la necesidad de dictar medidas de protección, sin precisar cuáles son esos requisitos que ha prescindido la autoridad policial.

Título: “EL MARCO SIMBÓLICO DE LA LEY DE VIOLENCIA FAMILIAR Y SUS MODIFICACIONES”. Autor: María Denis ALTAMIRANO VERA. Año: 2014. Universidad: UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO. Para optar el Grado de Maestro en Derecho.

Conclusiones:

*“1. De los resultados presentados en todas las tablas y figuras, se concluye que la Ley 26260 y sus modificaciones que regula la violencia familiar son deficientes, que se preocupa sólo de sancionar y no proteger ni prevenir eficazmente el problema, mucho menos se preocupa de tratar a la familia y recuperar al agresor, incrementándose considerablemente estos porcentajes de agresiones de acuerdo a los resultados estadísticos obtenidos, confirmándose la validez de la hipótesis planteada.*

*2. Se ha podido observar un elevado porcentaje en violencia psicológica, superando a la violencia física, desprotegiendo totalmente al bien jurídico integridad psíquica, debido a que no existe en la norma un criterio de cuantificación ni de valoración para el daño psicológico.*

*3. Se estableció las deficiencias en el sistema de justicia penal, familiar y policial respecto a los trámites normados sobre las lesiones generadas en la violencia familiar, Fiscalías Provinciales Penales y de Familia reciben 02 atestados policiales conteniendo investigaciones paralelas, uno sobre delito de lesiones y otro por la violencia familiar”.*

Comentario.

El investigador concluye que la Ley 26260 y sus modificaciones que regula la violencia familiar son deficientes, que se preocupa sólo de sancionar

y no proteger ni prevenir eficazmente el problema, sin embargo ello ya está superado cuando dispone que ambas partes deben someterse a terapias psicológicas, y que la violencia psíquica no es protegido al no contar con un criterio de cuantificación ni de valoración para el daño psicológico.

### **2.1.3. Antecedentes locales.**

No se ha encontrado antecedentes directos ni indirectos, razón por la cual no se desarrolló ningún aspecto sobre el particular.

## **2.2. BASES TEÓRICAS**

**A. De la variable independiente.** Incidencia de las medidas de protección.

### **Medidas de protección.**

Cuando hablamos de violencia contra la mujer y miembros integrantes de la familia, el bien jurídico que el estado debe proteger es el derecho que la persona tiene a no ser sometido a trato inhumano o degradante, por parte de ningún miembro de su familia consanguíneo o a fin, además claro está de proteger la salud e integridad física, psíquica y moral de la víctima debiendo valorarse ello como característica principal al momento de concederse una medida de protección, más aún si el plazo que tiene el Juez de Familia para brindar las mismas es de setenta y dos horas, siguientes a la interposición de la denuncia, debiendo evaluarse cada caso en concreto y resolverse en una audiencia oral la emisión, o no, de las medidas de protección que sean necesarias.

Por lo tanto, las medidas de protección brindadas por los Juzgados de Familia deben asegurar que estos actos de violencia no tiendan a repetirse, debiendo disponerse para ello providencias como son: **1)** el impedimento de acercamiento o proximidad a la víctima en cualquier forma, a la distancia que la autoridad judicial determine, la prohibición de comunicación con la víctima vía epistolar, telefónica, electrónica; asimismo, vía chat, redes sociales, red institucional, intranet u otras redes o formas de comunicación; **2)** la Prohibición del derecho de tenencia y porte de armas para el agresor, debiéndose notificar a la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil para que proceda a dejar sin efecto la licencia de posesión y uso, y para que se incauten las armas que están en

posesión de personas respecto de las cuales se haya dictado la medida de protección; **3)** realizar un Inventario sobre sus bienes; e incluso **4)** el retiro del agresor del domicilio; no siendo estas medidas una cláusula cerrada, pues el mismo cuerpo legal faculta al juez de Familia Brindar cualquier otra que permita la protección de la integridad personal y de la vida de las víctimas.

**Medidas de protección y medidas cautelares.-** Cuando se denuncia actos de violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar se activan una serie de mecanismos, como: (i) la indagación fiscal sobre la comisión del delito y la posible responsabilidad del supuesto agresor; (ii) la tutela cautelar que puede ejercer el juez de oficio o por solicitud de la víctima, siempre que estén orientadas a resguardar pretensiones de alimentos, régimen de visitas, tenencia, suspensión o extinción de la patria potestad, liquidación del régimen patrimonial y otros aspectos conexos que sean necesarios para garantizar el bienestar de las víctimas; y, (iii) las medidas de protección para la víctima.

Estos mecanismos responden a objetos y fines diversos por más que todas ellas estén íntimamente conectados con los mismos hechos de violencia generados bajo el grupo familiar; tal es así, que cuando se remite el caso a la fiscalía penal, lo que se busca es justificar la actividad punitiva del Estado contra el agresor, bajo el agravante de haber generado esa afectación en un contexto familiar. En caso se acredite el delito y la responsabilidad penal, podría conllevar a la privación de libertad del agresor o la absolución. El otro mecanismo que se activa es la tutela cautelar, a fin de lograr que la decisión final que se pueda alcanzar en estas pretensiones sean eficaces; y por último, se promueve hacia la parte afectada mecanismos de protección, a fin de evitar que continúen los actos lesivos. Como se puede advertir, estamos ante mecanismos de tutela, con objetos y naturaleza disímiles. En el caso del proceso penal, la relación procesal que se entablará, tendrá como sujeto pasivo al probable agresor; en el proceso que se plantea pretensiones vinculadas a los alimentos, régimen de visitas, tenencia, suspensión o extinción de la patria potestad, liquidación del régimen patrimonial tendrá como sujeto activo de la medida cautelar al titular del derecho material cuya tutela judicial se invoca; y en el caso de las medidas de protección, estas se orientarán a brindar medidas de tuición a favor de quien denuncia los actos



de violencia, y no solo para quien denuncia, sino incluso para otras personas que bajo el entorno familiar también sean pasibles de dichas agresiones. Este trabajo abordará este último supuesto, las medidas de protección, sin embargo, considero necesario diferenciar éstas de las medidas cautelares. Un antecedente cercano a estas medidas, es el que consigna el artículo 677 del Código Procesal Civil (en adelante, "CPC"), que señala: "Cuando la pretensión principal versa sobre separación, divorcio, patria potestad, régimen de visitas, entrega de menor, tutela y curatela, procede la ejecución anticipada de la futura decisión final, atendiendo preferentemente al interés de los menores afectados con ella. Si durante la tramitación del proceso se producen actos de violencia física, presión psicológica, intimidación o persecución al cónyuge, concubino, hijos o cualquier integrante del núcleo familiar, el juez debe adoptar las medidas necesarias para el cese inmediato de los actos lesivos, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 53". Este texto hace referencia a la tutela anticipada, para lo cual la medida que se dicta debe ser el reflejo de una alta probabilidad de la existencia del derecho invocado y la necesidad ineludible de anticipar los efectos de la sentencia final. Además, se acoge a las medidas de protección, las que difieren de la medida anticipada. La medida de protección se dicta, si durante la tramitación del proceso se producen actos de violencia física, presión psicológica, intimidación o persecución al cónyuge, concubino, hijos o cualquier integrante del núcleo familiar y no requieren de contracautela a diferencia de las medidas anticipadas. En atención a ello, el juez debe adoptar las medidas necesarias para el cese inmediato de los actos lesivos, sin perjuicio de que el propio juez ejerza facultades coercitivas como las sanciones pecuniarias o la detención por veinticuatro horas de quien resiste su mandato sin justificación, como lo señala expresamente el artículo 53 del CPC, pues no hay nada más perjudicial para la majestad de la justicia que la desobediencia a las órdenes y mandatos judiciales. Si bien las medidas de protección tienen destinatarios o beneficiados al cónyuge, concubino, hijos o cualquier integrante del núcleo familiar, ellas encierran a la vez medidas conminatorias dirigidas a la parte que provoca la agresión, que no necesariamente puede ser la parte demandada sino que también puede extenderse a la propia demandante. Las medidas conminatorias no están orientadas estrictamente hacia el demandado, sino a las partes y terceros que

participen en el proceso. Las medidas de protección aparecen también reguladas en la ley especial sobre violencia familiar y han sido materia de la temática del Pleno Jurisdiccional Superior Regional de Familia en septiembre de 2007. En dicho Pleno, se sostuvo que: *“El juez, para expedir una medida cautelar antes o durante un proceso de violencia familiar debe considerar: la fundamentación fáctica y prueba anexa, que le permita evaluar la verosimilitud del derecho invocado y el peligro en la demora (requisitos generales de fondo, establecidos en el artículo 611 del Código Procesal Civil) para dictar la medida de protección o medida cautelar pudiendo prescindir de aquellos requerimientos formales que, eventualmente, constituyan una barrera a la tutela urgente que ameritan estas medidas, de conformidad con lo señalado en el artículo 3 inciso d) de la Ley de Violencia Familiar, concordante con el artículo 23 del mismo cuerpo legal”*.

De las afirmaciones que se hace en dicho Pleno, se advierte la tendencia a confundir medidas de protección con medidas anticipadas. Las primeras tienen un fin tuitivo y están contempladas expresamente en la Ley contra la Violencia Familiar, así como en la segunda parte del artículo 677 del CPC, en cambio, las medidas anticipadas, cuyo fin inmediato no es la protección sino de alcanzar la eficacia de la decisión final, busca ejecutar de manera antelada la futura decisión final y requiere de la ejecución de una contracautela, así como de la casi certeza del derecho que se invoca y la necesidad impostergable de asumir dicha anticipación para la eficacia del derecho a definirse. Resaltamos la mirada no formalista que asume el Pleno Jurisdiccional de ese entonces, cuando sostiene, que: *“las medidas de protección pueden ser aplicadas por el juez que conoce de un hecho de violencia familiar, en cualquier proceso, de conformidad con el artículo 677 del CPC, dado que con amplitud el legislador prevé que para asuntos de familia e intereses de niños y adolescentes (divorcio, patria potestad, régimen de visitas, tenencia, tutela, curatela) se pueda ordenar de manera inmediata aquellas medidas que se consideren oportunas para el cese de los actos que se consideren lesivos y no se debe derivar esta facultad protectora a un nuevo pedido o un nuevo trámite porque con ello se limitaría el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva y el juez no estaría asumiendo su rol de garante de los*

derechos humanos". Si bien ambas medidas, la cautelar y la de protección, tienen varios elementos en común, como la temporalidad, la variabilidad y la urgencia; las medidas de protección, son asumidas como tutelas de prevención hacia la víctima, al margen que se logre demostrar o no la responsabilidad penal del supuesto agresor; son dos medidas diversas por más que ambas deriven de un supuesto de violencia, pues, se podría liberar al agresor de la condena penal por un tema de insuficiencia probatoria, pero ello no podría llevar a sostener que no se requiere una tutela de prevención a favor de la denunciante. Las medidas de protección juegan un rol muy importante en relación a la persona que ha promovido la denuncia, pues, puede haberse cancelado la punición, pero la tutela judicial seguirá y se mantendrá. La tutela de prevención, se materializa a través de estas medidas de protección. Los sujetos beneficiados no son, en estricto, la parte actora, la que formula la denuncia sino incluso pueden ser personas ajenas a la denuncia pero que están unidas, por un vínculo familiar o por su pertenencia al mismo grupo familiar. Dicho en otras palabras, hay una serie de sujetos indeterminados que podrían ser beneficiados con este tipo de medidas de protección, cuyo objeto central es la prevención frente al riesgo latente que se puede atentar contra la integridad o la vida de quien viene a denunciar ser víctima de violencia en su entorno familiar. A diferencia de la tutela anticipada, que está condicionada su vigencia a las resultas de la sentencia, en la tutela de prevención, su permanencia se justificará en tanto no se haya agotado con éxito la materialización de las medidas de tuición dictadas a favor de la persona que denuncia la agresión o maltrato. Evidentemente que para dictar estas medidas, la prueba que podría compulsar el juez, se relativizará. La mera alegación de quien invoca la violencia, es suficiente argumento para la medida de protección, con cargo a que luego el juez pueda reafirmar o levantar ésta, si verifica que las medidas de protección que en su momento dictó ya no justifica su permanencia; dicho en otras palabras, la mera alegación, activa la prevención, a diferencia de la tutela anticipada, que se requiere de una alta intensidad de la prueba que conlleve a asumir la alta probabilidad o la casi certeza de la existencia del derecho que alega la parte demandante. Las medidas de protección no necesariamente deben estar condicionadas a plazos, sino al cumplimiento de resultados, al margen del

tiempo en el que se pueda alcanzar ese resultado; en cambio, las medidas anticipadas, sí tienen un derrotero final, cual es, la sentencia que define la pretensión de la parte actora; para eso se constituyen, para hacer eficaz ese pronunciamiento final, pues, hay una alta evidencia del derecho que invoca la parte actora. Es una tutela que se brinda en estricto a la actora, y con anticipación, situación que en el caso de las medidas de protección, no puede asumirse en esa dimensión, porque puede también ser extensiva a sujetos ajenos a la relación material del conflicto porque lo que se busca es proteger la integridad física y emocional de los integrantes del grupo familiar, al margen de la propia denunciante.

La instrumentalidad, como una característica propia de estas medidas anticipadas, no se extiende a las medidas de protección, pues, su objeto no es el derecho en litis, sino un bien jurídico colateral al debate, como es la integridad de la persona humana en toda su dimensión, de ahí que hemos dicho, no es una justificante para su dictado, la exigencia de medios de prueba que demuestren el riesgo para su supervivencia sino que la mera alegación es suficiente para materializar esa tutela. Ello evidentemente no es atendible en el caso de la tutela anticipada, pues, la evidencia del derecho, tiene que estar sustentada en una alta probabilidad de su existencia, para lo cual, la prueba que se muestre, es un referente crucial para sostener esa casi certeza en la existencia del derecho en debate. Expuesta así las ideas, pasaremos a analizar la necesidad de la vigencia de las medidas de protección, al margen de los resultados de la actividad del Ministerio Público o de la decisión judicial, expresada en la sentencia.

**La vigencia de las medidas de protección** El artículo 23 de la Ley señala: “la vigencia de las medidas dictadas por el juzgado de familia o su equivalente se extiende hasta la sentencia emitida en el juzgado penal o hasta el pronunciamiento fiscal por el que se decida no presentar denuncia penal por resolución denegatoria, salvo que estos pronunciamientos sean impugnados”. La redacción de este enunciado nos lleva a preguntarnos si un texto legal debe ser de mera aplicación o requiere ser sometido a una interpretación judicial para apreciar los alcances de este enunciado. Esta además decir, a pesar del desarrollo del pensamiento jurídico, que los jueces han dejado de

ser meros aplicadores de normas; han asumido que su actividad judicial descansa en la interpretación que se haga de una situación jurídica cuyos supuestos aparecen descritos en una norma, pero, que interpretada ésta en concordancia con todo un bagaje normativo que concurre al caso, privilegiemos en primer orden una interpretación conforme a las reglas y valores del marco constitucional. Las medidas de protección deberían mantenerse al margen de las resultas de la actividad del Ministerio Público o de la responsabilidad penal del agresor, pues, a través de ellas se busca preservar a la persona humana, como eje de toda la arquitectura jurídica. Si hay el indicio que esta se encuentra en riesgo, todo el sistema de protección estatal se activa inmediatamente; la prevención tiene que mostrarse en toda su dimensión, pues, como dice el propio texto de la Carta Política, *“la defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado”*. Aún más, esa protección no solo es una carga para el Estado, quien debe velar por materializar mecanismos idóneos para su implementación, sino que también se constituye en un derecho de toda persona, que considere que está en riesgo su vida, su integridad moral, psíquica y física; pues, todo ello también se convierte en una limitante para alcanzar su libre desarrollo. El Estado no solo nos debe asegurar mecanismos de supervivencia y desarrollo sino que esa supervivencia tiene que ser en un escenario de tranquilidad, que permita que el individuo pueda desarrollar sus capacidades, sus talentos, su visión de vida, que en conjunción o coincidencia con otros talentos contribuyan a un desarrollo armónico de la vida social. Vivir en paz, con tranquilidad no es una aspiración sino un deber del Estado para crear los mecanismos necesarios para implementarla o derribar los elementos que la alteran. De ahí que como parte ese pacto social, se establece expresamente el deber de la comunidad y del Estado de proteger especialmente al niño, al adolescente, a la madre y al anciano en situación de abandono. Dicho en otras palabras, se debe dar una especial protección al grupo de personas que se encuentren en un estado vulnerable, para lo cual, la tuición se torna altamente necesaria. El binomio riesgo-prevención debe activarse con la simple alegación de ser víctima de violencia. En esta situación podemos también ubicar a la persona incapacitada para velar por sí misma a causa de una deficiencia física o mental; ahí con mayor razón, se intensifica

la necesidad de afirmar su derecho al respeto de su dignidad y a un régimen legal de protección (...) y seguridad. La actividad tuitiva del Estado no solo se agota en una protección subjetiva, sino también se extiende a la exigencia de contar con un escenario de convivencia pacífica, de ahí que el propio texto del artículo 7 de la Constitución debe ser asumido como un deber y como un derecho, a la protección del medio familiar. Todo esto como parte del deber primordial del Estado de promover el bienestar general que se fundamenta en la justicia y en desarrollo integral y equilibrado de la Nación.

El Tribunal Constitucional viene desarrollando un marco constitucional tutelar de la mujer, que busca remover y superar la posición desventajosa que históricamente ha ocupado. Además ha reafirmado la especial protección que merecen por parte del Estado aquellas personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad, “dentro de la política estatal de salvaguardar a los más desprotegidos, en uno de los grupos de titulares superreforzados de derechos fundamentales o como también puede llamárseles titulares con una calidad especial” (STC 2006, 5). En ese contexto, se encuentran las personas adultas mayores, cuyos derechos ameritan por parte del Estado un deber especial de protección (STC 2014, 5-15). La lucha contra la violencia familiar y la protección de las víctimas de dicha violencia constituyen bienes constitucionales.

A todo lo expuesto hay que agregar la concordancia con instrumentos internacionales que apuntan a la tutela de prevención que debe implementar el Estado frente a grupos vulnerables como sería el caso de la mujer víctima de violencia en su entorno de familia. En la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, Convención de Belem do Pará, encontramos las siguientes referencias a la protección de la mujer: “Artículo 1: Toda mujer tiene derecho a una vida libre de violencia, tanto en el ámbito público como en el privado. (...) Artículo 7: Los Estados Partes, entre los que se encuentra el Estado peruano, condenan todas las formas de violencia contra la mujer y convienen en adoptar, por todos los medios apropiados y sin dilaciones, políticas orientadas a prevenir, sancionar y erradicar dicha violencia y en llevar a cabo lo siguiente: (...) c. incluir en su legislación interna normas penales, civiles y administrativas, así como las de

otra naturaleza que sean necesarias para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer y adoptar las medidas administrativas apropiadas que sean del caso; d. adoptar medidas jurídicas para conminar al agresor a abstenerse de hostigar, intimidar, amenazar, dañar o poner en peligro la vida de la mujer de cualquier forma que atente contra su integridad o perjudique su propiedad; (...) f. establecer procedimientos legales justos y eficaces para la mujer que haya sido sometida a violencia, que incluyan, entre otros, medidas de protección, un juicio oportuno y el acceso efectivo a tales procedimientos. (...) Artículo 9: Para la adopción de las medidas a que se refiere este capítulo, los Estados Partes tendrán especialmente en cuenta la situación de vulnerabilidad a la violencia que pueda sufrir la mujer en razón, entre otras, de su raza o de su condición étnica, de migrante, refugiada o desplazada. En igual sentido se considerará a la mujer que es objeto de violencia cuando está embarazada, es discapacitada, menor de edad, anciana, o está en situación socioeconómica desfavorable (...). En la Convención Americana sobre Derechos Humanos, tenemos lo siguiente: “Artículo 17 indica que:

1. La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y debe ser protegida por la sociedad y el Estado”. En cuanto a los menores, debe recordarse que según el artículo 19 de dicha Convención: “Todo niño tiene derecho a las medidas de protección que su condición de menor requieren por parte de su familia, de la sociedad y del Estado”. Convención sobre Derechos del Niño “Artículo 19: 1. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas legislativas, administrativas, sociales y educativas apropiadas para proteger al niño contra toda forma de perjuicio o abuso físico o mental, descuido o trato negligente, malos tratos o explotación, incluido el abuso sexual, mientras el niño se encuentre bajo la custodia de los padres, de un representante legal o de cualquier otra persona que lo tenga a su cargo.

2. Esas medidas de protección deberían comprender, según corresponda, procedimientos eficaces para el establecimiento de programas sociales con objeto de proporcionar la asistencia necesaria al niño y a quienes cuidan de él, así como para otras formas de prevención y para la identificación, notificación, remisión a una institución, investigación, tratamiento y observación ulterior de los casos antes descritos de malos tratos al niño y,

según corresponda, la intervención judicial.” (Énfasis agregado). Todo este marco constitucional y convencional nos lleva a asumir como interpretación conforme a la Constitución del artículo 23 de la Ley, que la vigencia de la medida de protección será determinada en cada caso, luego que el juez, haya escuchado al beneficiado con la medida y se afirme la necesidad de su permanencia. En caso se afirme la necesidad de ésta, comunicará al juez de familia de esa decisión a fin que se mantenga la tutela de prevención, para lo cual se activará su seguimiento y administración a través de un mecanismo no jurisdiccional, propio de un procedimiento no contencioso. La escucha previa a la parte afectada con la decisión, es un derecho constitucional que ya tiene toda una regulación y tratamiento jurisprudencial, en el caso de los niños y adolescentes.

Como consecuencia de ello, el juez penal o el fiscal en el caso comunicarán al juez de familia su decisión de mantener en vigencia dichas medidas. La Ley no limita que la única oportunidad en la que se puede dictar medidas de protección sea estrictamente dentro de las setenta y dos horas de recibida la denuncia, ni tampoco el número de veces que se podría dictar. Perfectamente podrían ser variadas, con mayor o menor intensidad, según las circunstancias en la que se encuentre la persona protegida con dicha medida. Si la situación de riesgo se advierte que continua, a pesar que no ha logrado comprobar la responsabilidad penal del agresor, el juez dictará una nueva medida ad hoc a esa situación, caso contrario, podría perfectamente dejar sin efecto los alcances de dicha medida de protección. La tendencia es mantenerla, pues, ésta se convierte en una alerta permanente para cualquier acto o intento de agresión futura; ya hay un antecedente que perfectamente podría contribuir a un mejor análisis del clima de violencia en la que se desarrollaría la potencial víctima. El Informe Defensorial No. 173-2015-DP refiere que los casos de feminicidio, un sector de las víctimas denunciaron con antelación la violencia familiar. Esto nos permite afirmar dos situaciones: (i) se requiere tener un adecuado sistema de protección a las víctimas y (ii) se requiere contar con un adecuado registro de ellas, a fin que se pueda tener una lectura global de la problemática y no lecturas fragmentadas de ella.



Un estudio realizado por la Defensoría sobre el Femicidio, concluye que la víctima denunció los hechos y acudió al sistema de administración de Justicia para solicitar protección y el cese de la violencia. “En los casos de femicidio, respecto de la existencia de las denuncias previas de violencia familiar, en 7 casos (24.1%) las víctimas habían denunciado hechos previos de violencia familiar; mientras que en 20 casos (69%) familiares directos, amistades y otros señalaron en sus respectivas manifestaciones, que las víctimas habrían sido sometidas a hechos de violencia familiar previos al femicidio” (Defensoría del Pueblo 2015, 123). Esto significa que no es suficiente que se dicte medidas de protección sino que debe haber una adecuada implementación de ellas; ya una investigación periodística revela esta debilidad, al señalar que “El 60% de medidas de protección por violencia familiar se incumple” (Ortiz 2016). En cuanto al segundo aspecto, debemos apreciar que la Ley crea un Registro Único de Víctimas y Agresores, en el que se consignen los datos de la víctima y del agresor, la tipificación, las causas y consecuencias de la violencia, la existencia de denuncias anteriores. La existencia de este Registro responde a dos requerimientos importantes en la política contra la violencia hacia las mujeres. En primer lugar, permite contar con una visión integral del caso concreto y brindar una respuesta adecuada a la decisión y necesidades de la víctima desde los diferentes actores que intervienen; y en segundo lugar, contribuye a la elaboración de un diagnóstico general sobre el fenómeno de la violencia de género (causa, características y consecuencias) y la respuesta del Estado, posibilitando generar o modificar políticas, programas o intervenciones (Defensoría del Pueblo 2016, 108). Con estos antecedentes, podríamos sostener que una interpretación que podría hacerse del artículo 23 de la Ley, es que solamente cesaría esta tutela de prevención, en la medida que se advierta que no esté en riesgo el objeto de protección. Recurrir al mecanismo de la escucha previa a la parte beneficiada con la medida, que luego se busca dejar sin efecto, se justifica en atención a que los instrumentos procesales deben buscar adecuar la formalidad al logro de los objetivos de este proceso especial; para lo cual los jueces deben asumir rol de verificación permanente a fin de contrastar si dichas medidas de protección han cumplido su finalidad; en tanto no se logre evidenciar ello, la posibilidad del riesgo justificaría su vigencia. El interés superior de la víctima

es la razón de ser de este procedimiento que busca salvaguardar desde el inicio del procedimiento, más allá de meras apreciaciones literales de la norma, para lo cual, el propio legislador ha establecido que toda norma de la Ley tiene que ser interpretada bajo determinados principios rectores que deben regir no solo en la interpretación, sino en la aplicación de la Ley. Dicho en otras palabras, la interpretación del artículo 23 de la Ley tiene que ajustarse a determinados principios, como el de intervención inmediata y oportuna; la sencillez y oralidad; y la razonabilidad y proporcionalidad. El artículo 2, numeral 4 de la Ley dice que “los operadores de justicia, ante un hecho o amenaza de violencia, deben actuar en forma oportuna, sin dilaciones por razones procedimentales, formales o de otra naturaleza, disponiendo el ejercicio de las medidas de protección previstas en esta ley y otras normas, con la finalidad de atender efectivamente a la víctima”. Entonces, si esto es un criterio rector, porque no conjugar la lectura del artículo 23 de la Ley, con la necesaria escucha a la parte beneficiada con las medidas de protección, a fin de verificar la necesidad de esta o no, e incluso la intensidad de su permanencia si fuere el caso. Podríamos remitirnos al Código de Niños y Adolescentes en el que expresamente se señala que el juez debe escuchar la opinión del niño en los procesos de tenencia; todo ello con la finalidad de atender en mejor forma, a la persona que ha denunciado ser víctima de violencia. Hay que recordar que la propia Ley crea ese escenario cuando en el artículo 13 señala que “las denuncias por actos de violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar se regulan por las normas previstas en la presente ley y, de manera supletoria, por (...) el código de los niños y adolescentes”. Para complementar este análisis, recurrimos a otro principio rector que la propia ley invoca se considere en su interpretación. Es el principio de sencillez y oralidad. “Todos los procesos por violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar se desarrollan considerando el mínimo de formalismo (...)” por tanto ante la necesidad de mantener dichas medidas de protección, estas perfectamente podrían direccionar su administración y tratamiento a través de un procedimiento no contencioso.

El inciso 12 del artículo 749 CPC, dice: “Se tramitan en proceso no contencioso los siguientes asuntos: (...) Las solicitudes que, a pedido del

interesado y por decisión del juez, carezcan de contención”. Esto significaría que la vigencia de las medidas de protección perfectamente podría ser monitoreada o administrada por el juez de familia a través de este procedimiento.

Otro principio rector que la propia Ley consagra para su interpretación, es el principio de razonabilidad y proporcionalidad. El artículo 2, numeral 6 dice que el fiscal o juez a cargo de cualquier proceso de violencia, debe ponderar la proporcionalidad entre la eventual afectación causada y las medidas de protección y de rehabilitación a adoptarse; por tanto, bajo esa ponderación, si el propio juez o fiscal advierte que la denunciante estaría bajo riesgo de ser violentada, deberían estas mantenerse. El propio texto de este principio rector considera que se debe hacer un juicio de razonabilidad de acuerdo con las circunstancias del caso, emitiendo decisiones que permitan proteger efectivamente la vida, la salud y la dignidad de las víctimas. Como señala este principio, la violencia no surge en un instante, es el resultado de todo un desarrollo, de una evolución, que en esa dinámica se agota en la fase de explosión, con violencia, afectando bienes jurídicos; precisamente lo que se debe buscar es evitar su desarrollo, de ahí que se hace especial referencia, a que las medidas que se dicten deberían adecuarse a las fases del ciclo de la violencia y a las diversas tipologías que representa la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar. Precisamente, el Informe Defensorial No. 173- 2015-DP hace referencia a esta dinámica previa, “el 81% del total de tentativas de feminicidios, las propias víctimas sobrevivientes a la violencia señalaron que hubo amenazas previas por parte de los agresores de estos hechos” (Defensoría del Pueblo 2015, 196). Además dicho Informe Defensorial precisa que en el 28% del total de expedientes de feminicidio íntimo y tentativa analizados, las víctimas acudieron a los servicios estatales para denunciar los hechos de violencia que venían sufriendo, sin embargo, debido a la falta de una respuesta efectiva por parte de estos servicios, sus vidas continuaron en riesgo, siendo que la mitad de ellas, terminaron cruelmente asesinadas (Defensoría del Pueblo 2015, 197).

**B. De la variable dependiente.** No dictadas por violencia familiar en la modalidad de maltrato psicológico.

**Aspectos generales:**

La Ley N° 30364, en vigencia desde el 24 de noviembre de 2015, señala en su artículo 5° y 6° que la violencia contra las mujeres es cualquier acción o conducta que les cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico por su condición de tales, tanto en el ámbito público como en el privado; así también señala que la violencia contra cualquier integrante del grupo familiar es cualquier acción o conducta que le causa muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico y que se produce en el contexto de una relación de responsabilidad, confianza o poder, de parte de un integrante a otro del grupo familiar, teniéndose especial consideración con las niñas, niños, adolescentes, adultos mayores y personas con discapacidad.

Toda persona tiene derecho a la tutela jurisdiccional efectiva para el ejercicio o defensa de sus derechos e intereses, con sujeción a un debido proceso, entendiéndose como “debido proceso aquel que tiene por función asegurar los derechos fundamentales consagrados en la Constitución, dando a toda persona la posibilidad de recurrir a la justicia para obtener la tutela jurisdiccional de los derechos individuales, a través de un procedimiento legal”.

El Primer Congreso de Organizaciones Familiares celebrado en Madrid en 1987, concluyó que “la violencia familiar es toda acción u omisión de uno o varios miembros de la familia que da lugar a tensiones, vejaciones otras situaciones similares contra otros miembros de la misma”.

A mayor argumento la violencia familiar, es un problema social que debe ser reconocido masivamente por toda la población, para dar la debida importancia a una cuestión que se ha mantenido oculta a lo largo de los tiempos. Existen alternativas para los comportamientos destructivos, desaprobando con firmeza a los que maltratan, actuando como freno social de las personas abusivas. Afecta a un alto porcentaje de familias de cualquier comunidad, en todos los niveles económicos y culturales. Estos abusos, pueden ser emocionales, físicos, financieros y/o socio ambientales.

Nuestro ordenamiento jurídico ha clasificado los tipos de violencia familiar contra la mujer y los integrantes del grupo familiar, los cuales pueden físicos, psicológicos, sexuales y hasta económicos patrimoniales, puesto que esta también puede comprender la limitación de los recursos económicos destinados a satisfacer las necesidades de la víctima o privación de los medios indispensables que le permitan llevar una vida digna; así como satisfacer las necesidades de la víctima o privación de los medios indispensables que le permitan llevar una vida digna; así como la evasión del cumplimiento de sus obligaciones alimentarias, entre otros.

### **Tipo de violencia familiar: violencia psicológica**

Asimismo en el caso la violencia psicológica entendiéndose por ella aquella que se caracteriza por la presencia continuada de intimidación o de amenazas, por el recurso a humillaciones graves y reiteradas, que contribuyen a socavar la autoestima de la víctima, por la imposición del aislamiento social, por el sometimiento a restricciones económicas graves (cuando ella carece de recursos propios), por la desvalorización total como persona (calificándola por ejemplo de loca) o por un acoso continuado.

La violencia psicológica incluye también el maltrato verbal en forma repetida, acoso, reclusión y privación de los recursos físicos, financieros y personales. Los insultos incesantes y la tiranía que constituyen el maltrato emocional quizá sean más dolorosos que los ataques físicos, porque socavan eficazmente la seguridad y la confianza de la persona en sí misma y la violencia familiar consiste en todas las formas de abuso que tienen lugar en las relaciones entre los miembros de una familia. Entendida como la forma de interacción enmarcada en un contexto de desequilibrio de poder, siendo los dos ejes de desequilibrio de dicho poder dentro de la familia, el género y la edad.

### **Breve Referencia Histórica Evolutiva.**

En el Perú, la Violencia Familiar se explica desde su herencia colonial que se viene arrastrando pese a que la sociedad ha cambiado enormemente.

La conquista española trajo para el espacio femenino una cantidad de agresión considerable, porque ellas fueron parte del botín de guerra situación que se tradujo en violaciones concubinatos y en algunos matrimonios forzosos en el caso de las mujeres de la nobleza indígena. En la Nueva España la mujer debía al cónyuge obediencia total a cambio de sostén y “protección”; dentro de la familia, aunque la Iglesia católica denunciaba constantemente las agresiones contra la mujeres y sostenía que las obligaciones debían de ser iguales para la fidelidad mutua y las responsabilidades para con los hijos, en la realidad no siempre sucedió así. Las mujeres eran consideradas físicamente inferiores y, para muchos derechos y responsabilidades mentalmente también. La supuesta inferioridad generó un discurso sobre “la protección” que se tradujo en que para efectos legales se las ubicó en una perpetua minoría. Los maridos controlaban la mayor parte de las transacciones económicas de sus esposas, las mujeres casadas y las hijas solteras, y en general las mujeres no podían dedicarse a actividades públicas si era el caso de existir presencia masculina. Los padres eran los tutores de los hijos y las madres sólo podían hacerlo en caso de orfandad paterna y eso si el fallecido no había nombrado a otra persona para el caso, y si la mujer no volvía a casarse (Arrom 1985, 91).

Dentro de los hogares la violencia contra mujeres, niñas y niños era común, gran cantidad de ellos eran golpeados por esposos y padres, y también existen documentos de la época sobre una cantidad importante de incestos y uxoricidios impunes (Shmieder, 2001). Muchas mujeres huían de sus casas debido al maltrato pero eran perseguidas por la justicia que las obligaba a retornar “matrimonio cristiano”. Algunas lograban escapar y se relacionaban con otros hombres a través de concubinato o de relaciones ocasionales, pero corrían el riesgo de ser consideradas adúlteras” y por ello sufrir castigo de cárcel hasta ser perdonadas por el marido ofendido para regresar a cohabitar con él.

La autoridad de los maridos sobre las esposas continuó vigente durante todo el siglo XIX, pero la del padre sobre los hijos se vio reducida por el interés del liberalismo por la libertad individual. Las viudas mejoraron su situación al otorgárseles la patria potestad sobre sus hijos menores, pero las mujeres

casadas continuaron bajo la autoridad del marido “en pro de la cohesión de la sociedad conyugal”. La realidad era que el maltrato para las mujeres continuaba y principalmente en el hogar.

### **Violencia de Género.**

Se considera violencia de género a todas aquellas situaciones de violencia (explícita o implícita) de variada caracterización o magnitud, que afecte a las personas por el hecho de ser hombre o mujeres. Generalmente, éste término está asociado a la violencia contra las mujeres, debido que históricamente las mujeres han sufrido diversos tipos de violencia.

### **Violencia Familiar.**

Cuando nos referimos a la violencia familiar o intrafamiliar estamos hablando de todas aquellas situaciones que se producen al interior de una unidad familiar en las cuales uno o varios de sus miembros se interrelacionan con otros a través de la fuerza física la amenaza y/o la agresión emocional. La legislación peruana, a través del Texto Único Ordenado de la Ley N° 26260, “Ley de Protección frente a la Violencia Familiar”, la define como “cualquier acción u omisión que cause daño físico o psicológico, maltrato sin lesión, inclusive la amenaza o coacción graves y/o reiteradas, así como la violencia sexual...”

a) **Factores de la violencia familiar:** Se dividen en:

**Factores Sociales:** La socialización de hombre y mujeres, así como los patrones dominantes de feminidad y masculinidad, propician que los niños aprendan desde pequeños que los varones dominan y que la violencia es un medio aceptable para afirmar su poder y personalidad, en cambio a las niñas se les enseñan a evitar y tolerar las agresiones.

**Factores Culturales:** Jerarquías autoritarias de dominación y subordinación, sistema de roles rígidos en la familia, modelos dominantes de género o estereotipos de género, invisibilidad del abuso, ciertos consensos sociales que imponen naturalidad o legitiman el uso de la violencia en la familia.

**Factores Familiares:** Incapacidad para ejercer una función educativa y de crianza eficaz para todos los miembros del núcleo familiar. Bajo nivel de

autoestima y la pobreza de repertorios en habilidades sociales. Las uniones forzadas, el inicio muy temprano de responsabilidades paternas o familiares. Experiencias de violencia en la infancia y la juventud. La dependencia económica y emocional, así como problemas de alcohol y drogas.

**Factores Económicos:** El desempleo. Subempleo. Tensiones laborales. Precariedad del ingreso salarial.

#### **b) Expresiones de la violencia familiar.**

La violencia familiar se manifiesta de diversas maneras, que se pueden agrupar de la forma siguiente:

**Violencia física:** todos los hechos cometidos de manera intencional que pueden causar efectos como muerte, daño o perjuicio físico.

**Violencia psicológica:** se refiere a las acciones que pueden afectar la salud mental de la víctima, sea adulta o menor de edad, alterando su equilibrio emocional y generando un efecto destructivo sobre su personalidad depresión, disminución de las capacidades para enfrentar situaciones difíciles, propensión al suicidio. La violencia psicológica puede manifestarse mediante insultos, amenazas, humillaciones, malos tratos o inclusive a través del silencio.

**Violencia sexual:** se refiere a todas aquellas situaciones en las cuales se coacta la libertad sexual de la víctima, sea adulta o menor de edad, ocasionando con ello un daño físico y psicológico. No se refiere solamente al acto sexual sino también a cualquier otro ataque contra la libertad sexual, como exhibirse desnudo u obligar a la otra persona a desvestirse.

**Violencia por omisión:** son los casos en los que la inacción constituye una forma de asegurar que la situación de violencia se mantenga. El silencio, la indiferencia, el abandono, la negligencia pueden constituir formas de agresión aunque no se explicita la voluntad de hacer daño al otro.

#### **c) Derechos que se ven afectados por la violencia familiar.**

Ahora bien, la violencia familiar es una situación que atenta contra una serie de derechos fundamentales como:



**Derecho a la Vida.-** Puesto que muchas veces se pone en riesgo, pues a consecuencia de los golpes y maltratos puede ocasionar lesiones graves que inclusive conllevan a la muerte.

**Derecho a la Integridad.-** que comprende:

**Integridad Física.-** Contempla tres componentes:

**Integridad Corporal;** es la protección de los órganos, partes y tejidos del cuerpo.

**Integridad Funcional;** se refiere a la protección de las capacidades y funciones del cuerpo.

**Integridad de la Salud;** tanto del cuerpo, de la mente y entorno social.

**Integridad Psíquica.-** Es la preservación de las facultades y capacidades

**Integridad Moral.-** Referida al espacio subjetivo y de valores del ser humano.

**Derecho de Dignidad Humana.-** Puesto que la violencia familiar, atenta contra la condición de persona, vulnera los derechos fundamentales y disminuye las capacidades físicas, emocionales e intelectuales de la víctima.

**Derecho al Honor.-** Se produce fundamentalmente a través de los insultos, agresiones verbales. Además de otros derechos como la Libertad de expresión, Derecho a la intimidad, Derecho al libre desarrollo de la personalidad.

**La integridad psicológica como parte del derecho a la Salud.** Para abordar el tema de la violencia familiar en la modalidad de violencia psicológica, es importante entender a la persona como un todo, con derecho a su integridad personal, la que incluye su salud; de ese modo, es importante lo que entendemos por los derechos a la salud y a la integridad personal. La Constitución Política del Perú, en su artículo 7, reconoce el derecho a la salud de las personas como derecho fundamental y por lo tanto el Estado es garante de su respeto y disfrute. Al respecto, el Tribunal Constitucional ha señalado en el punto 6 de la sentencia N° 03425-2010-PHC/TC. Lima: “Nuestra Constitución en el artículo 7° reconoce el derecho de toda persona a la protección de su salud, es obligación del Estado contribuir a la promoción y defensa de aquella. Si bien el derecho a la salud no está contenido en el capítulo de derechos fundamentales, su inherente conexión con los derechos a la vida, a la integridad personal y el principio de dignidad de la persona, lo

configura como un derecho fundamental innegable y necesario para el propio ejercicio del derecho a la vida, conforme el artículo I del Título Preliminar de la Ley N° 26842 - Ley General de Salud, constituye “condición indispensable del desarrollo humano y medio fundamental para alcanzar el bienestar individual y colectivo”. En el punto 7 de la sentencia acotada, se hace referencia también a, que el derecho a la salud comprende la facultad que tiene todo ser humano de conservar un estado de normalidad orgánica funcional, tanto física como mental, así como de prevenirlo y restituirlo ante una situación de perturbación del mismo, lo que implica que el Estado debe efectuar acciones de prevención, conservación y restablecimiento, a fin de que las personas disfruten del más alto nivel de bienestar físico y mental, invirtiendo en la modernización y adoptar políticas, planes y programas en ese sentido. Asimismo, la Organización Mundial de la Salud, la define como "un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente como ausencia de afecciones o enfermedades". Por otro lado, el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en su artículo 12º señala que todo ser humano tiene derecho al "más alto nivel posible de salud física y mental", sin distinción de ninguna clase y no se limita al derecho a la atención de la salud.

La violencia familiar en la modalidad de violencia psicológica, constituye actos de vulneración de la salud y en especial de la salud mental de las mujeres que la sufren y reduce su estado de bienestar, de modo tal, que impide que desarrolle sus potencialidades, acceda a oportunidades de todo tipo, en todos los ámbitos de la vida, personal, social, económica, política, por lo que es necesario que la definamos. Así pues, la violencia familiar en la modalidad de maltrato psicológico, coloca a una persona en un estado diferente al que se entiende por salud, perturbando su integridad psicológica, no siendo compatible con la dignidad humana, viola el derecho humano a la integridad personal que incluye el aspecto psicológico. En tanto el ser humano es un todo, si se perturba su estabilidad emocional, una persona no será igual de productiva, ni se relacionará de forma adecuada con otras personas de su entorno, entre ellos su familia, y menos aún tendrá una participación activa como ciudadano. Ahora bien, sobre la definición de violencia psicológica, se dice que es “Toda acción u omisión dirigida a perturbar, degradar o controlar

la conducta, el comportamiento, las creencias o las decisiones de una persona, mediante la humillación, intimidación, aislamiento o cualquier otro medio que afecte la estabilidad psicológica o emocional”. De hecho coincidiendo con esta definición, en tanto la intención del autor de controlar a la víctima, lo que sigue me parece de gran importancia, para tomar la atención que merece este tipo de violencia familiar, teniendo en cuenta que esta modalidad de violencia no es de menor grado que la violencia física, “Los que ejercen la violencia psicológica, lo que se proponen, conscientemente, es obtener el control sobre su víctima, y, a la larga, destruir la identidad personal de la misma. Es un error interpretar que la violencia psicológica sea una modalidad de maltrato de menor entidad que el maltrato físico: cuando en realidad es la fase primordial de todo maltrato, que desprovee a la víctima de su propia identidad.” Sin embargo, la definición de violencia familiar que contiene nuestra legislación, incluye el daño que debe producir la violencia familiar y, en ese sentido el daño psicológico debería ser el resultado de toda violencia psicológica. A continuación, luego de señalar algunas definiciones de lo que se entiende por daño psicológico, voy a plantear una definición personal sobre el mismo, tomando como referencia la definición de salud mental y otros elementos que a mi modesto entender debería incluir la Ley de Protección frente a la violencia familiar, ya que una dificultad advertida en la definición de violencia familiar en nuestra legislación, gira en torno a referirse al daño, específicamente para nuestro estudio, al daño psicológico, sin definir que debemos entender por éste o delimitarlo. Ahora bien, es necesario tener en cuenta que en el caso de la violencia familiar en la modalidad de violencia psicológica, lo que entendamos por daño psicológico determinará el grado de protección al derecho a la salud y a la integridad personal de la víctima, máxime encontrándonos en un contexto de protección de los derechos humanos, a través de un proceso civil de carácter tuitivo. Entonces bien, una protección más amplia de las víctimas de este tipo de violencia debe no solo indicar si hay o no un daño psicológico, lo cual puede ser muy subjetivo, sino que es necesario determinar si el daño se presenta en algún grado, perturbando o amenazando de alguna forma la estabilidad emocional de la víctima.

## **Daño psicológico.**

Para autores como “Marianetti”, al evaluar lo que se entiende por daño psicológico, debe existir un menoscabo resultante de una alteración anatómica o funcional, física o psíquica, que lleve al organismo a una disfunción que implica una modificación del estado anterior de la persona. En el caso de Josefa Tkaczuck, el daño psíquico se define como un perjuicio producido por un evento no previsible e inesperado por el sujeto, al que le provoca determinadas perturbaciones, modifica su interacción con el medio y le origina alteraciones en el área afectiva, volitiva, ideativa o en todas ellas<sup>31</sup>. Así, en nuestro medio, “Manuel Sotelo refiere que el daño psíquico no se agota en el trastorno de estrés postraumático, sino que se puede manifestar de otras formas como los trastornos de ansiedad, los trastornos psicósomáticos, los trastornos de personalidad, la depresión y las fobias”, lo que cobra importancia al tener en cuenta que en la mayoría de los casos escogidos para su análisis en el presente trabajo, la conclusión de los informes psicológicos realizados a las víctimas indica que presentan “reacción ansiosa”. Una nota interesante respecto al daño psicológico ha sido trabajada por un perito en Psicología Forense. 1) El daño causado es originado por uno o varios eventos o sucesos inadecuados o inesperados que alteran el equilibrio emocional, psicológico o psíquico de la víctima, para quien, antes de definir el concepto de daño psíquico, psicológico o emocional, es necesario tomar en cuenta cinco elementos: 2) El evento, suceso, vivencia traumática, hecho dañoso o acto delictivo establece una relación causal entre agresor y víctima, directa o indirecta. 3) La vivencia traumática puede causar un desequilibrio o perturbación permanente, transitoria, periódica o pasajera en mayor o menor grado en todas o diferentes áreas de la personalidad de la víctima, pudiendo existir alteraciones en el área emocional, cognitiva, afectiva, volitiva, espiritual, que afectan la capacidad de desarrollo o goce individual, familiar, laboral, social, espiritual o recreativo. 4) Las perturbaciones pueden o no ser diagnosticadas de acuerdo con los catálogos de las psicopatologías como el DSM-IV o el CE 10, o simplemente consistir en síntomas de alteraciones emocionales sin naturaleza patológica permanente. 5) No se debe caer en el extremo de establecer la decisión categórica de la existencia o no del daño

psicológico, más bien de debe entender que pueden existir diferentes niveles del daño psicológico. Nótese que dentro de los elementos antes descritos, un aspecto importante a tomar en cuenta es que aquella no necesariamente será permanente, pudiendo ser transitoria, pasajera, siempre y cuando afecte la capacidad de desarrollo o goce de la víctima. Asimismo, es importante lo acotado en tanto toma en cuenta que pueden existir diferentes niveles de daño psicológico, que es precisamente lo que se debe medir. Además, nos interesa lo referente a la relación causal, cuándo estamos ante la presencia de uno o varios hechos perturbadores que terminan agravando la afectación o enfermedad que ya presentaba la víctima y, cuándo la afectación diagnosticada es el resultado directo del hecho.

Ahora bien, ya que es necesario medir entre otros, los síntomas de la víctima, como el nivel de daño que pueda sufrir aquella, para el peritaje psicológico se requieren directrices o determinadas escalas de valores que den como resultado un informe confiable y no sujeto a la subjetividad del evaluador, y en ese sentido, es importante tener en cuenta que al momento de la toma de muestras para el presente estudio, aún no se contaba con un protocolo o guía de valoración del daño psicológico, lo que será materia de análisis en el capítulo III, para determinar si constituyó un obstáculo para que las víctimas de violencia psicológica alcancen sentencias justas. Cabe indicar, que a la fecha tenemos una “Guía de valoración frente al daño psíquico en víctimas adultas de violencia familiar, sexual, tortura y otras formas de violencia intencional”, herramienta que si bien era necesaria, aún no podemos advertir la eficacia que tenga en nuestro medio, donde los recursos económicos tienen una trascendental importancia para realizar una evaluación exhaustiva con diferentes pruebas que permitan medir el estado emocional de la víctima, siendo importante contar con una cantidad considerable de peritos en psicología. En la referida Guía, se hace referencia al daño psíquico, al que se define como “la afectación y/o alteración de algunas de las funciones mentales o capacidades de la persona, producida por un hecho o un conjunto de situaciones de violencia, que determina un menoscabo temporal o permanente, reversible o irreversible del funcionamiento integral previo”. Resaltando en esta definición que al referirse

al menoscabo del funcionamiento integral previo de la víctima, se considera que aquél puede ser “temporal” como “reversible”, términos que permiten una protección más amplia de los derechos humanos protegidos en los tratados internacionales y consagrados como derechos fundamentales en nuestra Constitución, entre ellos el derecho a la integridad física y psicológica de toda persona, acorde con el más alto grado de bienestar y la dignidad humana. Con elementos similares, pero incluyendo como patrones de reacción común en las víctimas, la presencia de ansiedad, angustia, entre otros, se ha referido en la doctrina: “antes de evaluar a una víctima de maltrato psicológico en los casos de violencia familiar, es importante tener presente que el daño psicológico puede manifestarse en diferentes grados, que la reacción frente al maltrato puede aparecer de forma inmediata a la comisión del delito, así como también a corto, mediano y /o largo plazo; que un patrón de reacción común en las víctimas, es la presencia de ansiedad, angustia, shock generalizado, confusión, sentimientos de impotencia, rabia, perturbaciones en el sueño y cambios en el estilo de vida, por tanto el tipo de personalidad, la presencia o no de ansiedad, defensas predominantes, características afectivas previas y los cambios en el estilo de vida se requieren para saber cómo han afectado los hechos de violencia familiar en la víctima, un conocimiento del funcionamiento psicológico previo, durante y después de los hechos de violencia familiar”. Las definiciones y trabajos antes referidos, fueron escogidos en tanto en todos ellos se tomaron en cuenta elementos que considero indispensables al hablar de daño psicológico como resultado de la violencia familiar, esto es una perturbación que modifica el estado anterior de la persona, reacciones de ansiedad y otros que alteran su estabilidad emocional. En ese sentido, considero adecuada la definición que del daño psíquico se hace en la Guía de Valoración del Daño Psíquico antes citada, sin embargo para un tratamiento procesal efectivo en la lucha contra la violencia familiar, es necesario que se incluya en la ley la graduación del daño psicológico. Así pues, para una mayor protección de los derechos de las personas afectadas por la violencia familiar en la modalidad de violencia psicológica, es necesario determinar en el informe psicológico, tanto del grado de incapacidad como la temporalidad del daño psicológico ocasionado, para lo cual es necesario diferenciar la intensidad del mismo en leve, moderado y

severo, identificando la cantidad de días que requerirá la persona afectada para reponerse, lo que permitirá identificar cuando nos encontramos frente a una falta o delito y, cuando frente a un caso que no lo es y amerita una investigación dentro del ámbito civil tutelar.

### **Instrumentos internacionales de protección frente a la violencia familiar.**

**a). Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos:** De acuerdo con el artículo 2° inciso 1) del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos los Estados Parte se comprometen a respetar y a garantizar a todos los individuos que se encuentren en su territorio y están sujetos a su jurisdicción, los derechos reconocidos en el referido Pacto, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de otra índole (...). En esa misma línea, el artículo 3° del Pacto establece que los Estados Parte se comprometen a garantizar a hombres y mujeres la igualdad en el goce de todos los derechos civiles y políticos enunciados en dicho instrumento. De igual manera, el artículo 26° del Pacto prescribe que «todas las personas son iguales ante la ley y tienen derecho sin discriminación a igual protección de la ley. A este respecto, la ley prohibirá toda discriminación y garantizará a todas las personas protección igual y efectiva contra cualquier discriminación por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier índole (...)». Con respecto a la situación de las mujeres, es importante señalar que la prohibición de discriminar tiene el propósito de revertir la histórica situación de marginación de la población femenina. Esta prohibición obliga a los Estados, a adoptar medidas no sólo negativas sino positivas dirigidas a corregir la desigualdad que se presenta de facto. De otro lado, el artículo 7° del referido Pacto señala que «nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes (...). Toda persona tiene derecho a mantener y conservar su integridad física, psíquica y moral». El respeto de la integridad personal implica que nadie puede ser lesionado o agredido físicamente, ni ser víctima de daños mentales o morales que le impidan conservar su estabilidad psicológica o emocional. Al respecto, resulta oportuno mencionar que tanto la violencia física y/o psicológica importan una afectación a la integridad física, psíquica y/o moral de la víctima por lo que contravienen las disposiciones del Pacto Internacional de Derechos

Civiles y Políticos. En consecuencia, los Estados Parte deberán implementar las medidas necesarias para prevenir y erradicar la violencia al interior de la familia en cualquiera de sus manifestaciones.

**b). Convención Americana sobre Derechos Humanos.-** La Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José) reconoce también el principio de no discriminación e igual protección de y ante la ley. Así, el artículo 24° de la Convención establece que los Estados Parte están obligados a mantener sus leyes libres de regulaciones discriminatorias. Asimismo, a efectos de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, los Estados Parte están obligados a implementar políticas estatales que establezcan medidas idóneas frente a la violencia familiar (administrativas, judiciales, legales, educativas, etc.) entre las cuales también pueden considerarse medidas de carácter penal que determinen sanciones efectivas. Por último, la Convención Americana protege un conjunto de derechos civiles y políticos, entre los cuales está el derecho de toda persona a ser tratado con dignidad.

**c). La Convención para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención Belem Do Pará).-** La importancia de la Convención Belem do Pará radica en la definición de violencia contra la mujer que ésta prevé y en el establecimiento de responsabilidades estatales respecto de este tema. Así, dicho instrumento internacional define la violencia contra la mujer como una violencia de género y una manifestación de las relaciones de poder históricamente desiguales entre mujeres y hombres. Específicamente, señala que ésta comprende todo acto o conducta basada en su género que cause muerte, daño físico y/o psicológico a la víctima, tanto en el ámbito público como en el privado (Artículo 1°).

En la misma línea, el artículo 2° de la mencionada Convención establece que la violencia contra la mujer puede tener lugar en la familia (ámbito privado), en la comunidad, y en las actuaciones u omisiones estatales (ámbito público). En tal sentido, la Convención rechaza la idea de que la violencia contra la mujer sea un asunto meramente privado. Condena la violencia infringida por personas o instituciones, así como la violencia oficial. Por tanto, de acuerdo con la Convención Belem do Pará los actos de violencia contra la mujer pueden provenir tanto de las actuaciones estatales como de las acciones de los particulares. A efectos de la protección frente a la violencia



contra la mujer, la Convención prevé tres tipos de obligaciones. En primer lugar, debe señalarse que la obligación estatal comprendida en el artículo 7° de la mencionada Convención es de carácter negativo. Así, el literal a) de dicho artículo establece la obligación de «abstenerse (de manera inmediata) de realizar cualquier acción o práctica de violencia contra la mujer y velar porque las autoridades, funcionarios, personal y agentes e instituciones se comporten de conformidad con esta obligación». En segundo lugar, el literal d) del mismo artículo, establece obligaciones positivas de los Estados Parte, los cuales deben «adoptar medidas jurídicas para conminar al agresor a abstenerse de hostigar, intimidar, amenazar, dañar o poner en peligro la vida de la mujer de cualquier forma que atente contra su integridad o perjudique su propiedad». A su vez, el literal f) del mencionado artículo prescribe que también es obligación de los Estados Parte “tomar las medidas apropiadas para modificar o abolir leyes y reglamentos vigentes, así como las prácticas jurídicas o consuetudinarias que respalden la persistencia o tolerancia de la violencia contra la mujer”. En tercer lugar, de acuerdo con el literal b) del artículo 7° de la Convención, el Estado peruano está obligado a actuar con la debida diligencia durante la etapa de investigación y a sancionar los casos de violencia familiar. Adicionalmente, el literal g) del artículo 7° de la Convención obliga a los Estados Parte a establecer los mecanismos judiciales y administrativos necesarios para asegurar que la mujer objeto de violencia tenga acceso efectivo a resarcimiento o reparación del daño u otros medios de compensación justos y eficaces. Por otro lado, el artículo 8° de la Convención Belem do Pará establece una serie de obligaciones que son de carácter progresivo. Éstas buscan fomentar el conocimiento y la observancia del derecho de la mujer a una vida libre de violencia así como a la plena vigencia de sus derechos humanos.

**d). Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW)** La CEDAW fue aprobada por el Estado peruano mediante Resolución Legislativa N° 23432, de 4 de junio de 1982. El objetivo de la referida Convención es erradicar toda forma de discriminación contra la mujer, sea ésta directa e indirecta. En esa línea, el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, sostiene que la violencia contra ésta, al menoscabar o anular el goce de sus derechos

humanos y sus libertades fundamentales, constituye un acto de discriminación. En sus 30 artículos, la Convención no hace mención expresa al problema de violencia contra las mujeres, sin embargo establece una serie de obligaciones para los Estados Parte tendientes a eliminar la discriminación contra la mujer. La Recomendación General N° 19 del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, señala que la discriminación prevista en la CEDAW incluye la violencia basada en el sexo, es decir, la violencia dirigida contra la mujer por su condición de mujer. Ello, incluye actos que causen daños o sufrimientos de índole física, mental o sexual, amenazas de cometer esos actos, coacción y otras formas de privación de la libertad. En ese sentido, la violencia contra la mujer es una forma de discriminación que impide gravemente el goce de derechos y libertades en situación de igualdad con el hombre.

Estándares internacionales aplicables al derecho de las mujeres para acceder a recursos judiciales idóneos y efectivos cuando son víctimas de violencia. El sistema interamericano de derechos humanos se basa en la premisa de que el acceso a recursos judiciales idóneos y efectivos constituye la primera línea de defensa de los derechos básicos, que incluye los derechos de las mujeres en casos de violencia. En las Américas, los principios vinculantes de igualdad y no discriminación representan el eje central del sistema interamericano de derechos humanos y de los instrumentos vinculantes y aplicables al presente análisis, como la Convención Americana sobre Derechos Humanos ("Convención Americana"), la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre ("Declaración Americana") y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer ("Convención de Belém do Pará"). Estos instrumentos afirman el derecho de las mujeres a acceder a un recurso judicial sencillo y eficaz que cuente con las debidas garantías cuando denuncian hechos de violencia, así como la obligación de los Estados de actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar, sancionar y reparar estos hechos.

- 1. Obligación de debida diligencia:** Comprende que es deber de los Estados de proveer recursos judiciales no se limita a ponerlos formalmente a disposición de las víctimas, sino que tales recursos deben ser idóneos para

remediar las violaciones de derechos humanos denunciadas. Los Estados tienen el deber de actuar con la debida diligencia frente a cuatro obligaciones: la prevención, la investigación, la sanción y la reparación de las violaciones de los derechos humanos y evitar la impunidad.

**2. Debida diligencia y acceso a la protección judicial:** Esta referido a que la investigación de casos de violaciones de los derechos humanos, que incluye los casos de violencia contra las mujeres, deben llevarse a cabo por autoridades competentes e imparciales. Cuando tales investigaciones no son llevadas a cabo por autoridades apropiadas y sensibilizadas en materia de género o estas autoridades no colaboran entre sí, se registran retrasos y vacíos clave en las investigaciones, que afectan negativamente el futuro procesal del caso.

**3. Violencia y Discriminación:** CIDH ha establecido en sus precedentes que la obligación de garantizar la igualdad y la no discriminación, está íntimamente vinculada con la prevención de la violencia contra las mujeres. Comprende: El deber de revisión de normas, prácticas y políticas discriminatorias y la debida diligencia y medidas positivas contra la discriminación.

### **La violencia familiar en la legislación nacional Constitución política del Perú.**

Consagra el derecho de todo ciudadano a no ser sometido a violencia moral, psíquica o física, ni ser sujeto de tortura o tratos inhumanos o humillantes, además del pleno ejercicio de los derechos: A la vida, a la libertad, a la integridad moral, psíquica y física y a su libre desarrollo y bienestar.

Código civil: Reconoce la Violencia Física y Psicológica (manifestaciones de la Violencia Familiar) como causal para solicitar la disolución del vínculo matrimonial.

Código penal: El sistema penal peruano no ha considerado la violencia familiar como un delito y sanciona estos actos violentos a partir de figuras penales generales como lesiones graves, lesiones leves, faltas contra la

persona, delito contra la libertad sexual, y en casos extremos el homicidio o lesiones con subsiguiente muerte. Nuestra legislación penal prevé como agravante la relación de parentesco que exista entre víctima y agresor (cónyuge, conviviente, ascendiente, descendiente natural o adoptivo o pariente colateral de la víctima).

Plan nacional contra la violencia hacia la mujer 2009-2015 Fue aprobado mediante Decreto Supremo N° 0032009-MIMDES. Tiene como propósito desarrollar una serie de medidas para reducir y/o erradicar la violencia contra las mujeres. Reconoce la existencia de relaciones jerárquicas de poder entre hombres y mujeres, las que producen violencia contra las mujeres, siendo esta relación asimétrica una expresión de discriminación que afecta severamente a la población femenina y al desarrollo de la sociedad en su conjunto.

Ley N° 26260 “ley de protección frente a la violencia familiar” En junio de 1997, se promulgo el Texto Único Ordenado de la Ley N° 26260 “Ley de Protección Frente a la Violencia Familiar”, la cual ha sido modificada en reiteradas oportunidades. Esta norma establece la política del estado y de la sociedad frente a todo tipo de violencia familiar, asimismo dispone las medidas de protección a la víctima. Esta ley constituye un recurso complementario al Código de los Niños y Adolescentes porque reconoce como actos de violencia familiar los de maltrato físico y psicológico entre cónyuges, convivientes o personas que hayan procreado hijos en común, aunque no convivan, y de padres o tutores a menores de edad bajo su responsabilidad.

Esta norma tiene como objetivo fundamental comprometer al Estado en la erradicación de la violencia familiar. Está destinada a prevenir y proteger a las personas que son víctimas de violencia en el ámbito de sus relaciones familiares.

### **2.3. DEFINICIONES CONCEPTUALES**

- **Violencia:** Es una forma de ejercicio de poder mediante el empleo de la fuerza (física, verbal, política, económica, etc.). Implica una búsqueda de eliminar los obstáculos que se oponen al propio ejercicio de poder, mediante el control de la relación obtenido mediante el uso de la fuerza. Para que exista

la conducta violenta tiene que existir un desequilibrio de poder, que puede ser permanente o momentáneo.

- **Familia:** Por linaje o sangre, la constituye el conjunto de ascendientes, descendientes y colaterales con un tronco común y los cónyuges de los parientes casados.

- **Violencia familiar:** Todas aquellas situaciones que se producen al interior de una unidad familiar en las cuales uno o varios de sus miembros se interrelacionan con otros a través de la fuerza física la amenaza y/o la agresión emocional.

- **Violencia de género:** Todas aquellas situaciones de violencia (explícita o implícita) de variada caracterización o magnitud, que afecte a las personas por el hecho de ser hombre o mujeres. Generalmente, éste término está asociado a la violencia contra las mujeres, debido que históricamente las mujeres han sufrido diversos tipos de violencia.

- **Medidas de Protección:** Las medidas de protección son aquellas actitudes y decisiones que toma en cuenta el Estado a través de sus diversas instituciones públicas, a fin de hacer efectivo el cuidado y protección de la víctima de la agresión, con respecto a la agresión misma y a su agresor; son mecanismos que buscan brindar apoyo y protección a las víctimas de las agresiones e impedir la continuación de estas. Asimismo, estas medidas de protección van más allá, por cuanto buscan que la víctima se sienta tranquila y que pueda gradualmente volver a su vida normal, rehabilitándola de sus traumas.

- **Violencia psicológica.** Es la acción o conducta, tendiente a controlar o aislar a la persona contra su voluntad, a humillarla o avergonzarla y que puede ocasionar daños psíquicos. Daño psíquico es la afectación o alteración de algunas de las funciones mentales o capacidades de la persona, producida por un hecho o un conjunto de situaciones de violencia, que determina un menoscabo temporal o permanente, reversible o irreversible del funcionamiento integral previo.

## **2.4. HIPÓTESIS**

No incidirá significativamente las medidas de protección no dictadas por violencia familiar en la modalidad de maltrato psicológico por el Segundo Juzgado de Familia de Huánuco, en la Quinta Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Huánuco de enero a setiembre de 2018, porque se dispone su archivamiento definitivo, al no acreditarse lesión psicológica.

### **Hipótesis específico.**

**SH1.-** El nivel de eficacia logrado de las medidas de protección no dictadas por violencia familiar en la modalidad de maltrato psicológico por el Segundo Juzgado de Familia de Huánuco, es relativamente bajo en la Quinta Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Huánuco de enero a setiembre de 2018, porque se dispone su archivamiento definitivo, al no acreditarse lesión psicológica..

**SH2.-** En el 2018 no ha sido muy frecuentes la aplicación de las medidas de protección no dictadas por violencia familiar en la modalidad de maltrato psicológico por el Segundo Juzgado de Familia de Huánuco, en la Quinta Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Huánuco de enero a setiembre de 2018, porque se dispone su archivamiento definitivo, al no acreditarse lesión psicológica.

## **2.5. VARIABLES**

### **2.5.1. Variable Independiente**

Incidencia de las medidas de protección no dictadas.

### **2.5.2. Variable Dependiente**

Por violencia familiar en la modalidad de maltrato psicológico.

## 2.6. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES

VARIABLE	DIMENSIONES	INDICADORES
<b>VARIABLE INDEPENDIENTE</b> <b>Incidencia de las medidas de protección no dictadas.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Denuncia policial o ante juzgado de familia sobre violencia familiar.</li> <li>• Resolución que admite a trámite la denuncia sobre violencia familiar en la modalidad de maltrato psicológico</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Notificación a la parte denunciada.</li> <li>• Se programa fecha de audiencia única.</li> <li>• Dispone se practique examen psicológico de la agraviada por el equipo multidisciplinario.</li> <li>• Resuelve no otorgar medidas de protección a favor de la agraviada.</li> </ul>
<b>VARIABLE DEPENDIENTE</b> <b>Por violencia familiar en la modalidad de maltrato psicológico.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Remisión de copias certificadas al ministerio público.</li> <li>• Disposición de investigación preliminar.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Declaración de las partes.</li> <li>• Examen pericial psicológico de la parte agraviada.</li> <li>• Conclusión de la investigación preliminar.</li> <li>• No procede formalizar ni continuar con la investigación preparatoria.</li> </ul>

## CAPÍTULO III

### 3. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN

#### 3.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN

La presente investigación es de tipo aplicada, porque ha tenido como base la descripción en el tiempo sobre los expedientes sobre Violencia familiar en la modalidad de maltrato psicológico, obrantes en el Segundo Juzgado de Familia de Huánuco, y las carpetas fiscales sobre Lesiones Psicológicas tramitados en la Quinta Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Huánuco, en las que se resolvió el archivamiento de lo actuado, al disponer no haber mérito para formalizar y continuar con la investigación preparatoria por la comisión de los delitos de agresiones en contra de las mujeres e integrantes del grupo familiar, al no existir afectación psicológica que acredite la lesión psicológica.

##### 3.1.1. Enfoque

El trabajo de investigación está enfocado en el ámbito jurídico social, ya que aborda una problemática social, en los casos que se dispuso Archivamiento Definitivo, por declarar que no procede formalizar y continuar con la investigación preliminar, toda vez que la intervención penal queda excluida por la existencia de conducta que infringe una disposición administrativa causando impunidad.

##### 3.1.2. Alcance o nivel

La investigación tiene el alcance o nivel de descriptiva – explicativa.

##### 3.1.3. Diseño

**M** ←————— **O**

Dónde: M = Es la muestra

O = Es la Observación

#### 3.2. POBLACIÓN Y MUESTRA

**Población.** La población que se utilizó en la investigación han sido los expedientes sobre Violencia familiar en la modalidad de maltrato psicológico, del Segundo Juzgado de Familia de Huánuco, y las carpetas fiscales sobre



Lesiones Psicológicas tramitados en la Quinta Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Huánuco, periodo enero a setiembre de 2018.

**Muestra.** Se ha determinado de manera aleatoria 06 expedientes sobre violencia familiar psicológica del Segundo Juzgado de Familia de Huánuco, y 06 carpetas fiscales de la Quinta Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Huánuco.

### **3.3. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS**

#### **3.3.1. Para la recolección de datos**

<b>Técnicas</b>	<b>Instrumentos</b>	<b>Utilidad</b>
Análisis documental	Matriz de análisis	Recolección de datos
Fichaje	Fichas Bibliográficas de resumen	Marco teórico y bibliografía

#### **3.3.2. Para el procesamiento y análisis de información**

- Se ha procedido con analizar críticamente los contenidos de los expedientes y carpetas seleccionados sobre violencia familiar, así como de los libros, revistas y páginas web vinculadas al tema.
- Asimismo se ha analizado la ficha de análisis de los documentos estudiados y compulsados a lo largo de todo el proceso de investigación.

## **CAPÍTULO IV**

### **4. RESULTADOS**

Analizados los instrumentos de recolección de datos, descritos en el proyecto de investigación, se llevó adelante la realización de la aplicación correspondiente para su análisis, ya que el resultado informativo que se obtuvo, es el indicante de las conclusiones a las que se llegó en la investigación.

La finalidad de la presente investigación científica contenida en el informe de tesis, es dar solución a un problema no solo en el marco teórico, sino de manera fáctica teniendo en cuenta que en el tema jurídico relacionado a la incidencia de las Medidas de Protección no dictadas por Violencia Familiar en la modalidad de Maltrato Psicológico por el Segundo Juzgado de Familia de Huánuco, en la Quinta Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Huánuco de enero a setiembre de 2018, en la que en el Segundo Juzgado de Familia de Huánuco, por resolución resuelve no otorgar las Medidas de Protección por violencia familiar en la modalidad de maltrato psicológico, a favor del agraviado, ya que del Informe Psicológico expedido por el Psicólogo del Equipo Multidisciplinario de la Corte de Huánuco, concluye no existe afectación psicológica que acredite la lesión psicológica, disponiendo en el día remitir copias certificadas de todo lo actuado a la Fiscalía Penal Corporativa de turno de Huánuco, que mediante Disposición resuelve no haber mérito para formalizar y continuar con la investigación preparatoria por la comisión del delito de Agresiones en contra de las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar, archivándose los actuados en el modo y forma de ley. Para ello, se aplicó una ficha de observación como instrumento de medición sobre una muestra que consta de seis carpetas fiscales sobre la materia, para determinar el fundamento por el cual el Representante del Ministerio Público, dispone no formalizar ni continuar con la investigación preparatoria, y como consecuencia de ello la recarga procesal; así mismo explorar y brindar alternativas de solución que hagan posible su atención.

#### **4.1. PROCESAMIENTO DE DATOS**

Los resultados obtenidos del análisis realizado a seis carpetas fiscales, tramitados por ante el en la Quinta Fiscalía Provincial Penal Corporativa de

Huánuco de enero a setiembre de 2018, se determinó en dichas investigaciones se está disponiendo la no formalización ni continuación con la investigación preparatoria.

**CUADRO No. 01 – Variable Independiente**

VARIABLE DEPENDIENTE				
CARPETAS	NOTIFICACIÓN A LA PARTE DENUNCIADA.	SE PROGRAMA FECHA DE AUDIENCIA ÚNICA.	DISPONE SE PRACTIQUE EXAMEN PSICOLÓGICO	RESUELVE NO OTORGAR MEDIDAS DE PROTECCIÓN A FAVOR DE LA AGRAVIADA.
No.2006014506-2018-1217-0	SI	SI	SI	SI
No.2006014506-2018-716-0	SI	SI	SI	SI
No.2006014506-2018-635-0	SI	SI	SI	SI
No.2006014506-2018-790-0	SI	SI	SI	SI
No.2006014506-2018-560-0	SI	SI	SI	SI
No.2006014506-2018-221-0	SI	SI	SI	SI

Fuente: Matriz de Análisis de Carpetas Fiscales.  
Elaborado: Tesista.

En el primer cuadro se advierte de las Carpetas Fiscales tramitados en la Quinta Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Huánuco de enero a setiembre de 2018, que previamente a la remisión de copias certificadas al Ministerio Público se advierte en el Segundo Juzgado de Familia de Huánuco, que se ha procedido con notificar al denunciado con la resolución que admite a trámite la denuncia sobre actos de violencia familiar, y en las setenta y dos horas se programó fecha y hora para la diligencia de audiencia de medidas de protección, disponiéndose el examen psicológico de la parte agraviada y con el resultado del protocolo de Pericia Psicológica, mediante Auto Final se resuelve no otorgar medidas de protección a favor de la agraviada, ya que del Informe Psicológico expedido por el Psicólogo del Equipo Multidisciplinario de la Corte de Huánuco, concluye que presenta: *“Evaluado no evidencia indicadores de afectación emocional, compatible a hechos denunciados”*;

Es decir que no existe afectación psicológica que acredite la lesión psicológica, y no obstante dispone en el día remitir copias certificadas de todo lo actuado a la Fiscalía Penal Corporativa de turno de Huánuco, para que en

uso de sus atribuciones emita disposición de incido de la investigación preliminar por la comisión de los delitos de agresiones en contra de las mujeres e integrantes del grupo familiar, archivándose los actuados en el modo y forma de ley.

**CUADRO No. 02 – Variable Dependiente**

<b>VARIABLE DEPENDIENTE</b>				
<b>CARPETAS</b>	<b>DECLARACIÓN DE LAS PARTES</b>	<b>EXAMEN PERICIAL PSICOLÓGICO DE LA PARTE AGRAVIADA.</b>	<b>CONCLUSIÓN DE LA INVESTIGACIÓN PRELIMINAR.</b>	<b>NO PROCEDE FORMALIZAR NI CONTINUAR CON LA INVESTIGACIÓN PREPARATORIA</b>
<b>No.2006014506-2018-1217-0</b>	SI	SI	SI	SI
<b>No.2006014506-2018-716-0</b>	SI	SI	SI	SI
<b>No.2006014506-2018-635-0</b>	SI	SI	SI	SI
<b>No.2006014506-2018-790-0</b>	SI	SI	SI	SI
<b>No.2006014506-2018-560-0</b>	SI	SI	SI	SI
<b>No.2006014506-2018-221-0</b>	SI	SI	SI	SI

Fuente: Matriz de Análisis de Carpetas Fiscales.

Elaborado: Tesista.

En el segundo cuadro se advierte de las Carpetas Fiscales tramitados en la Quinta Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Huánuco de enero a setiembre de 2018, en las que se tiene que el representante del Ministerio Público mediante Disposición resuelve se lleve adelante diligencias entre ellas la declaración indagatoria de la parte agraviada y denunciada, para tal fin se programó fecha y hora, asimismo se procedió con el examen pericial psicológico de la parte agraviada y demás diligencias necesarias para el esclarecimiento de los hechos materia de denuncia. Transcurrido el plazo de la investigación El fiscal emite disposición de Conclusión de la Investigación Preliminar, para que por Disposición resolver que no procede formalizar ni continuar con la investigación preparatoria por la presunta comisión del delito de Agresiones en contra de las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar.

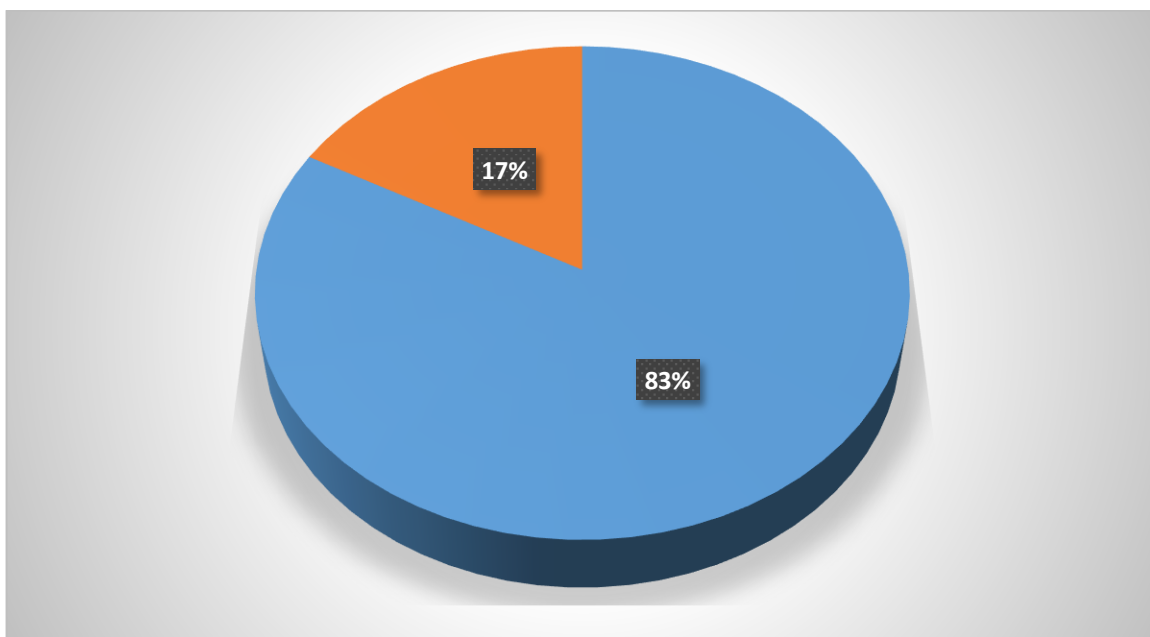
En la tabla a continuación se determina el total de Carpetas Fiscales tramitados en la Quinta Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Huánuco de enero a setiembre de 2018, se advierte en mayor volumen que el fiscal emite disposición de no procede formalizar ni continuar con la investigación preparatoria, y un volumen mínimo en la que el representante del Ministerio

Público emite disposición de formalización y continuación de la investigación preparatoria, del delito de Agresiones en contra de las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar.

**Tabla N° 01 – Matriz de análisis de Carpetas Fiscales – Disposición de no procede formalizar ni continuar investigación preparatoria**

<i><b>Carpetas Fiscales de la Quinta Fiscalía Penal Corporativa de Huánuco periodo 2018</b></i>	<i><b>Fi</b></i>	<i><b>%</b></i>
<i><b>El fiscal emite disposición de no procede formalizar ni continuar con la investigación preparatoria.</b></i>	<i><b>05</b></i>	<i><b>83 %</b></i>
<i><b>El fiscal emite disposición formalizando y continuando con la investigación preparatoria.</b></i>	<i><b>01</b></i>	<i><b>17 %</b></i>
<i><b>TOTAL</b></i>	<i><b>06</b></i>	<i><b>100 %</b></i>

Fuente: Matriz de Análisis de Carpetas Fiscales.  
Elaborado: Tesista



Fuente: Matriz de Análisis de Carpetas Fiscales.  
Elaborado: Tesista

**Gráfico N° 01 – Matriz de análisis de Carpetas Fiscales – Disposición de no procede formalizar ni continuar investigación preparatoria**

## **Análisis e interpretación**

Habiendo hecho un análisis a la muestra de la investigación, que consta de 06 Carpetas Fiscales tramitados en la Quinta Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Huánuco de enero a setiembre de 2018, se advierte de lo aplicado que en el 83 % de las carpetas, el fiscal emite disposición de no procede formalizar ni continuar con la investigación preparatoria, del delito de Agresiones en contra de las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar, al no haberse acreditado con la pericia psicológica afectación con lesión .

Ahora bien, el 17% el fiscal emite disposición de formalización y continuación de la investigación preparatoria, del delito de Agresiones en contra de las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar, al acreditarse lesión psicológica con el Protocolo de Pericia Psicológica.

### **Conclusión.**

Como resultado podemos afirmar que en la Quinta Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Huánuco de enero a setiembre de 2018, se evidencia un mayor volumen de porcentaje, en la que el Representante del Ministerio Público, emite disposición de no procede formalizar ni continuar con la investigación preparatoria, del delito de Agresiones en contra de las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar, ya que del Informe Psicológico expedido por el Psicólogo del Equipo Multidisciplinario de la Corte de Huánuco, concluye que presenta: *“Evaluado no evidencia indicadores de afectación emocional, compatible a hechos denunciados”*; es decir que no existe afectación psicológica que acredite la lesión psicológica, disponiendo su archivamiento definitivo, por los siguientes fundamentos que desglosaremos a continuación:

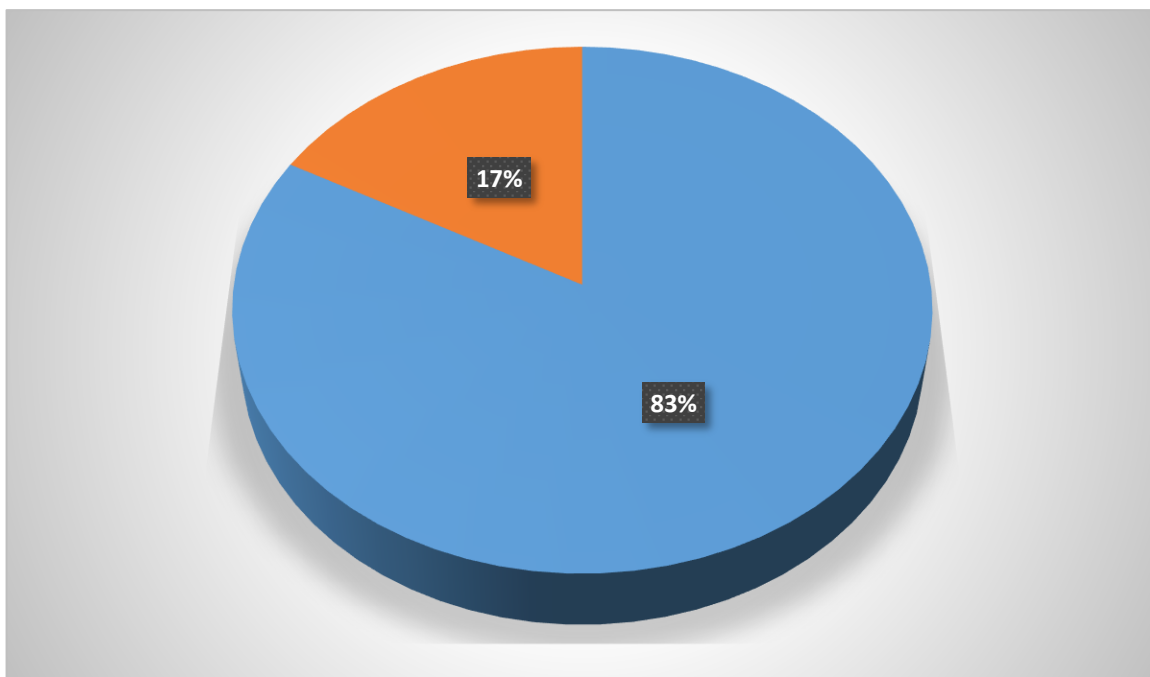
- Porque el Juez del Segundo Juzgado de Familia de Huánuco, pese a no evidenciarse indicadores de afectación emocional, compatible a hechos denunciados; es decir que no existe afectación psicológica que acredite la lesión psicológica, remite copias certificadas al Ministerio Público a fin proceda conforme a sus atribuciones.
- Porque el Juez del Segundo Juzgado de Familia de Huánuco, pese a no dictarse medidas de protección a favor de la parte agraviada dispone la remisión de las copias certificadas al Ministerio Público a fin proceda conforme a sus atribuciones.

Es claro que en nuestro ordenamiento jurídico el asunto de actos de violencia familiar se dicte o no medidas de protección a favor de la parte agraviada, ordena la remisión de las copias certificadas al Ministerio Público a fin proceda conforme a sus atribuciones, disponiendo el inicio de investigación preliminar del delito de Agresiones en contra de las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar.

**Tabla N° 02 – Matriz de análisis de Carpetas Fiscales – Examen pericial psicológico**

<i><b>Carpetas Fiscales de la Quinta Fiscalía Penal Corporativa de Huánuco periodo 2018</b></i>	<i><b>Fi</b></i>	<i><b>%</b></i>
<i><b>Examen pericial psicológico practicado al agraviado concluye que no existe afectación psicológica que acredite lesión.</b></i>	<i><b>05</b></i>	<i><b>83 %</b></i>
<i><b>Examen pericial psicológico practicado al agraviado concluye que existe afectación psicológica que acredite lesión.</b></i>	<i><b>01</b></i>	<i><b>17 %</b></i>
<i><b>TOTAL</b></i>	<i><b>06</b></i>	<i><b>100%</b></i>

Fuente: Matriz de Análisis de Carpetas Fiscales.  
Elaborado: Tesista



Fuente: Matriz de Análisis de Carpetas Fiscales.  
Elaborado: Tesista

**Gráfico N° 02 – Matriz de análisis de Carpetas Fiscales – Examen pericial psicológico**

### **Análisis e interpretación**

Habiendo analizado la muestra de la presente investigación, referente a 06 carpetas fiscales de la Quinta Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Huánuco de enero a setiembre de 2018, del delito de Agresiones en contra de las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar, advirtiéndose de lo aplicado que el 83 % de las carpetas al examen pericial psicológico, practicado al agraviado concluye que no existe afectación psicológica que acredite lesión. Y escasamente un 17% en la que al examen pericial psicológico, practicado al agraviado concluye que existe afectación psicológica que acredite lesión.

### **Conclusión.**

De la obtención de todos estos resultados, es posible llegar a una conclusión la cual está dada que el mayor porcentaje de las carpetas al examen pericial psicológico, practicado al agraviado concluye que no existe afectación psicológica que acredite lesión, en la investigación preliminar por el delito de agresiones en contra de las mujeres e integrantes del grupo



familiar, disponiendo su archivamiento definitivo, siguiendo la misma suerte la medidas de protección dictas por el Juez del Segundo Juzgado de Familia de Huánuco.

Sin embargo no se tuvo en cuenta la no existencia de afectación psicológica y evitar se remitan copias al Ministerio Público para que en uso de sus atribuciones proceda con disponer investigación preliminar, ya que en dicha investigación solo se corroborará lo examinado por el psicólogo del Equipo Multidisciplinario de la Corte Superior, evitando con ello la innecesaria carga procesal, es por ello es que con la presente investigación se propone soluciones, a fin de no vulnerar el debido proceso.

Por lo tanto podemos afirmar que las Medidas de Protección no dictadas por Violencia Familiar en la modalidad de Maltrato Psicológico por el Segundo Juzgado de Familia de Huánuco, no tiene incidencia significativa en la Quinta Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Huánuco de enero a setiembre de 2018, ya que lo único que se obtiene con ello es que las fiscalía se recargue innecesariamente de investigaciones que se encuentran archivadas.

#### **4.2. CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS Y PRUEBA DE HIPÓTESIS**

Con la información recopilada, analizada e interpretada mediante técnicas de análisis, se evidencia que en la Quinta Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Huánuco de enero a setiembre de 2018, no tiene incidencia significativamente las medidas de protección no dictadas por violencia familiar en la modalidad de maltrato psicológico por el Segundo Juzgado de Familia de Huánuco, ya que Representante del Ministerio Público, emite disposición de no procede formalizar ni continuar con la investigación preparatoria, del delito de Agresiones en contra de las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar, ya que del Informe Psicológico expedido por el Psicólogo del Equipo Multidisciplinario de la Corte de Huánuco, concluye que presenta: *“Evaluado no evidencia indicadores de afectación emocional, compatible a hechos denunciados”*; es decir que no existe afectación psicológica que acredite la lesión psicológica, disponiendo su archivamiento definitivo.

## CAPÍTULO V

### 5. DISCUSIÓN DE RESULTADOS

#### 5.1. CONTRASTACIÓN DE LOS RESULTADOS DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN.

De acuerdo a los resultados obtenidos después de analizadas las carpetas fiscales del delito de Agresiones en contra de las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar, queda demostrado que en la Quinta Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Huánuco de enero a setiembre de 2018, que no obstante el Segundo Juzgado de Familia de Huánuco, haber resuelto no otorgar las Medidas de Protección por violencia familiar en la modalidad de maltrato psicológico, a favor del agraviado, en virtud que del Informe Psicológico expedido por el Psicólogo del Equipo Multidisciplinario de la Corte de Huánuco, concluye que presenta: *“Evaluado no evidencia indicadores de afectación emocional, compatible a hechos denunciados”*; es decir que no existe afectación psicológica que acredite la lesión psicológica, dispone en el día remitir copias certificadas de todo lo actuado a la Fiscalía Penal Corporativa de turno de Huánuco, quien al parecer dispone no haber mérito para formalizar y continuar con la investigación preparatoria por la comisión del delito de Agresiones en contra de las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar, archivándose los actuados en el modo y forma de ley, por lo tanto con la presente investigación se hará conocer y constatar que con la presente investigación brindaremos mecanismos de solución a ello, evitando se remitan innecesariamente en el día copias certificadas de todo lo actuado a la Fiscalía Penal Corporativa de turno, recargando la labor del Ministerio Público, ya que es completamente previsible su archivamiento, al no existir afectación psicológica que acredite la lesión psicológica en el agraviado.

## **CONCLUSIONES**

En la Quinta Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Huánuco de enero a setiembre de 2018, conforme se ha analizado las seis carpetas fiscales del delito de Agresiones en contra de las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar, se arribó a las siguientes conclusiones:

- 1.-** Las medidas de protección no dictadas por violencia familiar en la modalidad de maltrato psicológico por el Segundo Juzgado de Familia de Huánuco, no tiene incidencia significativa porque se dispone su archivamiento definitivo en la Quinta Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Huánuco de enero a setiembre de 2018, al no acreditarse lesión psicológica.
- 2.-** El nivel de eficacia de las medidas de protección no dictadas por violencia familiar en la modalidad de maltrato psicológico por el Segundo Juzgado de Familia de Huánuco, es relativamente baja porque se dispone su archivamiento definitivo en la Quinta Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Huánuco de enero a setiembre de 2018, al no acreditarse lesión psicológica.
- 3.-** En el 2018 no han sido muy frecuentes la aplicación de las medidas de protección no dictadas por violencia familiar en la modalidad de maltrato psicológico por el Segundo Juzgado de Familia de Huánuco, porque se dispone su archivamiento definitivo en la Quinta Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Huánuco de enero a setiembre de 2018, al no acreditarse lesión psicológica.

## **RECOMENDACIONES**

Al culminar la investigación, luego de estudiar la muestra y comprobar nuestra hipótesis se recomienda lo siguiente:

**1.-** Para una mayor incidencia de las medidas de protección no dictadas por violencia familiar en la modalidad de maltrato psicológico por el Segundo Juzgado de Familia de Huánuco, evitando se disponga su archivamiento definitivo en la Quinta Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Huánuco de enero a setiembre de 2018, al no acreditarse lesión psicológica conforme al protocolo de Pericia psicológica practicado al agraviado, no debe remitirse copias de todo lo actuado al Ministerio Público.

**2.-** Para contar con mayor frecuencia de las medidas de protección no dictadas por violencia familiar en la modalidad de maltrato psicológico por el Segundo Juzgado de Familia de Huánuco, evitando se disponga su archivamiento definitivo en la Quinta Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Huánuco de enero a setiembre de 2018, al no acreditarse lesión psicológica conforme al protocolo de Pericia psicológica practicado al agraviado, debe emitirse un pleno jurisdiccional que disponga la no remisión de copias certificadas al Ministerio Público.

**3.-** Para una mayor frecuencia de aplicación de las medidas de protección no dictadas por violencia familiar en la modalidad de maltrato psicológico por el Segundo Juzgado de Familia de Huánuco, evitando se disponga su archivamiento definitivo en la Quinta Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Huánuco de enero a setiembre de 2018, al no acreditarse lesión psicológica conforme al protocolo de Pericia psicológica practicado al agraviado, debe disponerse que la agraviada y el denunciado sean sujetos de evaluación psicológica en forma periódica.

## REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- BIGLIAZI GERI, Lima; (1997). *“Diritto Civile. Norme, Soggetti e Rapporto Giuridico”*. UTET: Torino.
- BUSTAMANTE Reynaldo. (2001). *“Derechos Fundamentales y Proceso Justo”*, Lima: Ara Editores.
- CARNELUTTI, Francesco. (1951) *“Teoría Generale del Diritto”*. Edizione Scientifiche Italiane: Roma.
- CHIOVENDA, Giuseppe. *“Principii di diritto processuale civile”*. JOVENE: Napoli.
- CHICHIZOLA, Mario. (1996). *“El debido proceso como garantía constitucional”*. Lima.
- CÓDIGO CIVIL (2017) JURISTA EDITORES E.I.R.L. Lima.
- CÓDIGO PROCESAL CIVIL (2017) JURISTA EDITORES E.I.R.L. Lima.
- CÓDIGO DE LOS NIÑOS Y ADOLESCENTES (2017). JURISTA EDITORES E.I.R.L. Lima, 696-697.
- DE BERNARDIS, Luis. (1995). *La Garantía Procesal del Debido Proceso*, Lima: Cultural Cuzco.
- DEVIS ECHANDIA, Hernando. (1997). *“Teoría General del Proceso”*. Editorial Universidad: Buenos Aires.
- ESPINOSA-SALDAÑA. Eloy. (2000). *“El debido proceso en el ordenamiento jurídico peruano y sus alcances en función a los hechos por nuestra Corte Suprema”* sobre el particular en: Cuadernos Jurisdiccionales, Lima: Ediciones Legales.
- GIMENO SENDRA, Vicente. (2004). *“Derecho procesal civil”*. Colex: Madrid.

- HOYOS. Arturo. (1996). *“El debido proceso”*. Santa Fe de Bogotá: Editorial Themis.
- LEIBLE, Stefan. (1999). *“Proceso civil alemán”*. Diké: Medellín.
- LINARES, Juan. (1989). *“Razonabilidad de las Leyes. El «debido proceso» como garantía innominada en la Constitución Argentina”*. Buenos Aires: Astrca.
- MARINONI, Luiz Guilherme. (2011). *“Da teoria da relação jurídica processual ao proceso civil do estado constitucional”*. Ediciones Caballero Bustamante: Lima.
- MORALES, Juan. (1999). *“La Garantía Constitucional del debido proceso”*, en: *Diálogo con la Jurisprudencia Año 2*, Lima: Gaceta Jurídica.
- PROTO PISANI, Andrea. (2006). *“Lezioni di diritto processuale civile. Jovene”*: Nápoles.
- ROSENBERG, Leo. (1955). *“Tratado de Derecho Procesal Civil”*. EJE: Buenos Aires. Tomo I.
- SERRA DOMINGUEZ, Manuel. (1998). *“Nulidad procesal”*. En: *Revista Peruana de Derecho Procesal*. No. 2.
- VON BULLOW, Oskar. (2008). *“La teoría de las excepciones procesales y los presupuestos procesales”*. Ara: Lima. Primera Edición Peruana.

## **ANEXOS**

## MATRIZ DE CONSISTENCIA

### “LA INCIDENCIA DE LAS MEDIDAS DE PROTECCION NO DICTADAS POR VIOLENCIA FAMILIAR EN LA MODALIDAD DE MALTRATO PSICOLOGICO POR EL SEGUNDO JUZGADO DE FAMILIA DE HUANUCO EN LA QUINTA FISCALIA PENAL CORPORATIVA DE HUANUCO DE ENERO A SETIEMBRE DE 2018”

PROBLEMAS	OBJETIVO	HIPOTESIS	OPERACIÓN DE VARIABLES			
			VARIABLES	DIMENSION	INDICADORES	INSTRUMENTO
<b>PROBLEMA GENERAL</b> ¿Cómo incidirá las medidas de protección no dictadas por violencia familiar en la modalidad de maltrato psicológico por el Segundo Juzgado de Familia de Huánuco, en la Quinta Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Huánuco de enero a setiembre de 2018?  <b>PROBLEMA ESPECIFICO</b> <b>PE1</b> ¿Cuál es el nivel de eficacia logrado de las medidas de protección no dictadas por violencia familiar en la modalidad de maltrato psicológico por el Segundo Juzgado de Familia de Huánuco, en la Quinta Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Huánuco de enero a setiembre de 2018?  <b>PE2</b> ¿Qué tan frecuentes han sido la inaplicación de las medidas de protección no dictadas por violencia familiar en la modalidad de maltrato psicológico por el Segundo Juzgado de Familia de Huánuco, en la Quinta Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Huánuco de enero a setiembre de 2018?	<b>OBJETIVO GENERAL</b> Demostrar el grado de incidencia de las medidas de protección no dictadas por violencia familiar en la modalidad de maltrato psicológico por el Segundo Juzgado de Familia de Huánuco, en la Quinta Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Huánuco de enero a setiembre de 2018.  <b>OBJETIVO ESPECIFICO</b> <b>OE1</b> Determinar el nivel de eficacia logrado de las medidas de protección no dictadas por violencia familiar en la modalidad de maltrato psicológico por el Segundo Juzgado de Familia de Huánuco, en la Quinta Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Huánuco de enero a setiembre de 2018.  <b>OE2</b> Identificar el nivel de frecuencia con que se han presentado las medidas de protección no dictadas por violencia familiar en la modalidad de maltrato psicológico por el Segundo Juzgado de Familia de Huánuco, en la Quinta Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Huánuco de enero a setiembre de 2018.	<b>HIPOTESIS GENERAL</b> No incidirá significativamente las medidas de protección no dictadas por violencia familiar en la modalidad de maltrato psicológico por el Segundo Juzgado de Familia de Huánuco, en la Quinta Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Huánuco de enero a setiembre de 2018.	<b>INDEPENDIENTE</b>  Incidencia de las medidas de protección no dictadas.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Denuncia policial o ante juzgado de familia sobre violencia familiar</li> <li>Resolución que admite a trámite la denuncia sobre violencia familia en la modalidad de maltrato psicológico</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Notificación a la parte denunciada.</li> <li>Se programa fecha de audiencia única.</li> <li>Dispone se practique examen psicológico de la agraviada por el equipo multidisciplinario.</li> <li>Resuelve no otorgar medidas de protección a favor de la agraviada</li> </ul>	1. Matriz de análisis. 2. Fichas Bibliográficas de resumen. 3. Cuestionario. 4. Guía de entrevista.
			<b>DEPENDIENTE</b>  Por violencia familiar en la modalidad de maltrato psicológico.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Remisión de copias certificadas al ministerio público.</li> <li>Disposición de investigación preliminar.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Declaración de las partes.</li> <li>Examen pericial psicológico de la parte agraviada.</li> <li>Conclusión de la investigación preliminar.</li> <li>No procede formalizar ni continuar con la investigación preparatoria</li> </ul>	